

ENERO DE 1970 - ENERO DE 2008

**38 AÑOS DE CONFLICTOS
SOCIALES EN BOLIVIA**

ENERO DE 1970 - ENERO DE 2008

**38 AÑOS DE CONFLICTOS
SOCIALES EN BOLIVIA**

**Descripción general y por periodos
gubernamentales**

ROBERTO LASERNA

MIGUEL VILLARROEL

Primera edición: Julio de 2008
© 2008, Roberto Laserna, Miguel Villarroel
Depósito legal: 4 - 1 - 1579 - 08
Diagramación: Molina & Asociados
Editores: **CERES**
Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social
Pasaje Warisata 1, Av. Circunvalación esq. Potosí
Casilla 949 • Cochabamba, Bolivia

COSUDE
Calle 13, N° 455 esq. Av. 14 de Septiembre, Obrajes
Casilla 4679 • La Paz - Bolivia

INSTITUTO PARA LA DEMOCRACIA
Av. 14 de Septiembre, N° 4807 esq. Calle 2, Obrajes
La Paz - Bolivia

ÍNDICE

Introducción	7
Antecedentes	9
La base electrónica de conflictos	11
Los conflictos en el tiempo, cambios y persistencias	13
1. Ámbito geográfico y lugar de los conflictos	14
2. Principales protagonistas de los conflictos	16
3. Objetivo principal de los conflictos	19
4. Forma o manifestación dominante de los conflictos.....	21
5. Adversario de los conflictos.....	23
Los conflictos en el contexto político nacional	25
1. Ovando-Tórrez (1 de enero de 1970 a 20 de agosto de 1971)..	27
2. Bánzer FPN - Bánzer FF. AA. (21 de agosto de 1971 a 21 de julio de 1978)	30
3. Pereda-Padilla-Guevara-Gueiler-García Meza. (22 de julio de 1978 a 10 de octubre de 1982).....	33
4. UDP - Siles. (11 de octubre de 1982 a 4 de agosto de 1985)...	37
5. MNR - Víctor Paz. (5 de agosto de 1985 a 6 de agosto de 1989)	39
6. MIR - Jaime Paz. (7 de agosto de 1989 a 6 de agosto de 1993)	43
7. MNR - Sánchez de Lozada 1. (7 de agosto de 1993 a 6 de agosto de 1997)	46
8. ADN - Bánzer. (7 de agosto de 1997 a 6 de agosto de 2001)...	49
9. ADN - Quiroga. (7 de agosto de 2001 a 6 de agosto de 2002)	52
10. MNR - Sánchez de Lozada 2. (7 de agosto de 2002 a 17 de octubre de 2003)	55

11. Carlos Mesa. (18 de octubre de 2003 a 12 de junio de 2005)....	59
12. Rodríguez Veltzé (13 de junio de 2005 a 22 de enero de 2006)	62
13. MAS - Morales. (23 de enero de 2006 a 31 de enero de 2008)	65
Conclusiones	70
Anexo 1	73
Anexo 2	76
Anexo 3	80
Anexo 4	85

1

INTRODUCCIÓN

Entre 1983 y 1985 implementamos en CERES un programa de investigaciones sobre movimientos sociales. En el marco de ese programa se ficharon los periódicos de circulación nacional desde enero de 1970, con el fin de sistematizar la información y contribuir al análisis con datos cuantitativos acerca de los comportamientos colectivos.

A fines de los años 90, un nuevo programa de investigaciones, esta vez dedicado al análisis de los conflictos y a desarrollar formas más adecuadas de concertación, actualizó esa base de datos, utilizando la misma metodología y criterios conceptuales a fin de que las series fueran consistentes.

A partir del año 2004 se ha mantenido de una manera más o menos regular el registro de prensa y la digitalización de los datos sobre eventos conflictivos en Bolivia.

A lo largo de todo este tiempo se han utilizado los datos para análisis muy diversos. A veces concentrando la atención en los comportamientos conflictivos, a veces en el desempeño de algunos grupos. En unos casos como datos complementarios para la comprensión de hechos, períodos o temas, y en otros casos como fuente principal de datos para análisis comprensivos de mediano y largo plazo. Todo esto nos convenció de la utilidad de esta base de datos y de la necesidad de ponerla a disposición de un público más amplio. Esa es la intención de este documento de trabajo, que cubre un periodo de 38 años y un mes, de enero de 1970 a enero de 2008, tiempo en el que se registraron en la prensa casi 12 mil eventos conflictivos. Por supuesto, en realidad han debido ocurrir muchos más pues no todos lograron la atención de los medios, sea por su dimensión, su ubicación o su reiteración. De todos modos, esos 12 mil eventos ofrecen abundante material para el análisis y la comprensión de uno de los aspectos más característicos de nuestra vida social: la acción colectiva.

El documento no tiene mayores pretensiones que las de describir a grandes rasgos ese aspecto, mostrando la información obtenida en forma de series tempora-

les primero, y de frecuencias referidas a trece períodos diferenciados por sus administraciones gubernamentales. La lectura completa del texto puede resultar a ratos tediosa o repetitiva, pero el lector que quiera contar con información adicional sobre un periodo determinado o sobre tendencias de largo plazo encontrará que es suficiente ir a la sección correspondiente y extraer de ella los datos que necesite. Este documento está pensado como un instrumento de trabajo, o más bien como una fuente de información. Los criterios que describen un periodo o un acontecimiento no tienen otro fin que el de recordar que hay datos adicionales que deben tomarse en cuenta. Los autores hemos trabajado en detalle muchos de esos acontecimientos, periodos y actores, pero no quisimos abultar en exceso este documento con exposiciones más largas que hubieran distraído el propósito instrumental que nos guía y que también podrían distraer a los usuarios de esta información.

Al final del documento se incluyen como anexos los datos que fueron utilizados para elaborar las series y los gráficos de frecuencia de este documento, de manera que quienes lo necesiten podrán agregar y ordenar los datos de una manera que se ajuste mejor a sus necesidades analíticas. Confiamos, además, en que a partir de este documento los investigadores se sentirán invitados a consultar la base original de datos para extraer de ella más y mejor información, y convocados a buscar en el conocimiento de los conflictos los caminos que nos conduzcan a una convivencia pacífica en la que ningún grupo o ciudadano se vea obligado a recurrir a la presión o a la violencia para expresarse y acceder a un lugar en el sistema decisional que afecta su vida.

2

ANTECEDENTES

A lo largo de la historia reciente de Bolivia, los conflictos sociales ha marcado el pulso del país. En nuestro caso, estos hechos sociales no sólo representan tensiones entre grupos sociales, disonancias entre la sociedad y el Estado o expresiones de malestar o esperanza, sino que también son formas de ejercer la ciudadanía, son medios para ampliar y conseguir derechos individuales y colectivos, y son también procedimientos para conquistar o defender privilegios de grupo.

En cierta medida, los conflictos sociales reflejan la dinámica correlación de fuerzas de los actores sociales en su interacción pública. Por ello, analizar estos hechos sociales ofrece una rica fuente de conocimientos, pues permiten visualizar los problemas y desigualdades que aquejan a una sociedad, pero también la falta o debilidad de mecanismos institucionales que permitan resolverlos antes de que se manifiesten en los espacios públicos y, sobre todo, antes de que vulneren los derechos de otros ciudadanos, que es algo que suele ocurrir cuando los actores apelan a la violencia.

Durante las últimas cuatro décadas, Bolivia ha atravesado profundas transformaciones en su tejido político, económico, social e institucional, lo cual a su vez ha reconfigurado los escenarios, los actores, las demandas y las reglas de juego dentro de las cuales se desarrollan los conflictos sociales.

A esto debe añadirse que nunca antes en nuestro país, desde el retorno de la institucionalidad democrática en 1982, se dieron enfrentamientos tan violentos que afectan e involucran a porciones tan grandes de la sociedad como en los últimos siete años. A partir del año 2000, sucesos como la denominada “Guerra del Agua”, el enfrentamiento en febrero del año 2004 entre policías, militares y sociedad civil, los conflictos en la ciudad de El Alto que impusieron la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, los enfrentamientos en Huanuni en octubre del 2006 y en Cochabamba en enero de 2007 entre diversos grupos ciudadanos y, por último, los hechos ocurridos en Sucre relacionados con la Asamblea Constituyente, nos muestran un panorama de deterioro de los mecanismos

institucionales, que son cada vez menos capaces para canalizar y resolver de forma pacífica los conflictos sociales. Como en otras coyunturas, también se observa la emergencia de nuevos actores con nuevas demandas y nuevas maneras de plantearlas. Lo que queda claro es que se hace necesario encontrar y promover nuevos escenarios de concertación para la convivencia pacífica a partir, sobre todo, del (re)conocimiento entre los diversos grupos y actores que existen o han surgido recientemente en Bolivia y los intereses y expectativas que representan.

Entender la génesis y desarrollo de los procesos sociales que conducen al conflicto, y pensar en las posibles formas darles solución o mediación atañe a varias disciplinas y permite múltiples enfoques. Lo que aquí se presenta es una información cuantitativa sobre los conflictos sociales que han sido registrados por la prensa nacional en Bolivia, detallando sus características más importantes: protagonistas, demandas, formas de llevar adelante el conflicto, tendencias, escenarios, etc. Esta aproximación y los datos que proporciona permiten, a la manera de una imagen satelital, situar en un contexto más amplio fenómenos y acontecimientos que, a veces por su cercanía o por su proximidad temporal, parecen estar aislados y no ser parte de una tendencia de mediano o largo plazo.

Contar con información del tipo señalado permitirá a los analistas y científicos sociales disponer de un cúmulo de informaciones suficientemente amplio y general sobre el cual asentar o contrastar sus investigaciones sobre aspectos específicos o coyunturales que atañan a los conflictos sociales en Bolivia. También posibilitará observar de qué manera estos hechos sociales se han ido transformando en el tiempo o presentan variaciones periódicas en coyunturas específicas.

LA BASE ELECTRÓNICA DE CONFLICTOS

La base electrónica sobre conflictos sociales en Bolivia ¹ consiste en la codificación del registro que hacen de los mismos los periódicos más importantes del país. Esta base contiene información desde enero de 1970 hasta el presente. Las fuentes hemerográficas consultadas fueron Presencia (hasta que dejó de publicarse), Los Tiempos, El Deber, La Prensa, El Diario y La Razón. En algunos casos se ha buscado complementar la información con otros periódicos.

Los datos sobre conflictos fueron recogidos en fichas (una ficha por evento) organizadas en campos predeterminados. Cada uno de estos campos fue llenado de manera sintética con las principales características de los eventos conflictivos descritos en la prensa. En total se tienen registrados cerca de 12.000 eventos conflictivos.

Se cataloga a un hecho social como “conflicto” cuando existe una clara movilización de los actores sociales (por lo general con cierto grado de violencia) en pos de sus reivindicaciones u objetivos inmediatos perseguidos o, por lo menos, cuando se está muy cerca de la toma de acciones “de hecho” (declaración de estado de emergencia, pié de huelga, etc.). De esta forma, no se toman en cuenta otro tipo de manifestaciones que, si bien dan cuenta de la existencia o de la emergencia de conflictos, no movilizan en forma explícita a los sujetos involucrados en ellas (solicitadas, cartas, aclaratorias, denuncias, etc.), pero que, sin embargo, pueden constituirse en formas particulares de acción para ciertos grupos sociales y, en muchos casos, anticipan o anuncian situaciones conflictivas.

Una explicación extensiva de las variables y las categorías que las componen se presenta en el Anexo 1. Por otro lado, y a fin de facilitar la lectura y el análisis de la información, en algunas variables se han agrupado las categorías en otras más generales atendiendo a características comunes de varias de ellas.

1 El diseño y el concepto de la base fueron desarrollados por Roberto Laserna, miembro del CERES. Actualmente la base es actualizada y mantenida por el citado investigador y por Miguel Villarroel N., miembro de Ciudadanía.

Esta reorganización de los datos se halla explicitada en el Anexo 2. De manera general, los gráficos estadísticos utilizados en este informe corresponden a las categorías agrupadas.

El analista debe tomar en cuenta que es seguro que la base de datos que presentamos subestima la cantidad total de conflictos en el país. En primer lugar, porque nuestra fuente de información registra sobre todo lo que ocurre en las grandes ciudades y no logra cubrir los hechos de las ciudades pequeñas, las capitales de provincia, los pueblos o las áreas rurales, salvo que sean de una magnitud suficientemente grande como para interesar a los lectores de esos medios. En segundo lugar, porque en los momentos de mayor intensidad conflictiva, muchos eventos que lograrían la atención de la prensa en otras circunstancias pasan totalmente desapercibidos, pues devienen en una parte habitual de la vida social. En el 2004-2005, por ejemplo, hicimos un seguimiento directo de los conflictos en una de las ciudades principales del país y lo comparamos con la información registrada por la prensa, y encontramos que en realidad habían ocurrido en los días de mayor actividad cerca de cuatro veces más eventos conflictivos. Si esta muestra se proyectara a todo el período, seguramente tendríamos un diagrama con oscilaciones mucho mayores a las observadas en los gráficos que presentamos en este texto y el número de conflictos en los momentos más intensos sería significativamente superior al registrado en nuestra base.

4

LOS CONFLICTOS EN EL TIEMPO, CAMBIOS Y PERSISTENCIAS

En este capítulo se verá, de manera general, cuáles han sido las principales tendencias, cambios o persistencias que los conflictos sociales han manifestado a lo largo de los treinta y ocho años que abarca nuestro periodo de estudio (Ver Gráfico N° 1).

Gráfico N° 1



Entre el 1° de enero de 1970 y el 31 de enero de 2008 los periódicos que utilizamos han registrado 11.893 eventos conflictivos. El Gráfico N° 1 nos muestra la cantidad total de conflictos nuevos por año en todo este lapso de tiempo. Una de las primeras cosas que es posible observar es que el número de conflictos varía significativamente en el tiempo y, además, parecería existir cierta correlación entre el aumento o disminución de éstos y las diferentes coyunturas que vivió Bolivia.

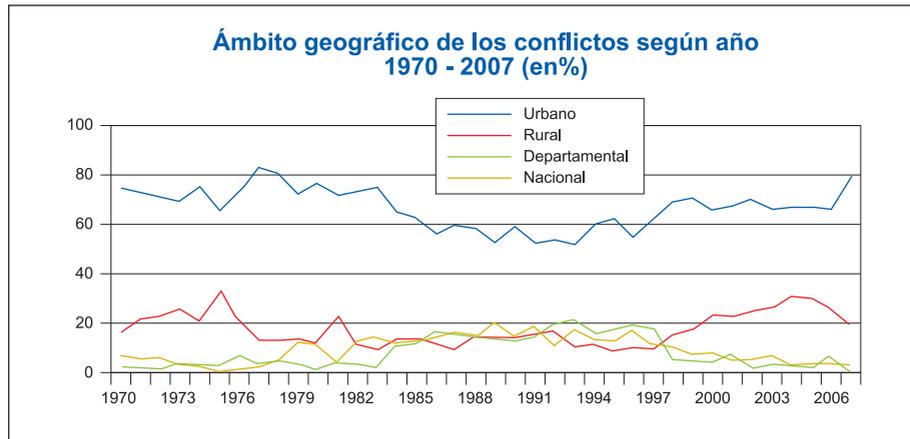
En este sentido, pueden establecerse de manera rápida cuatro grandes periodos: el primero de ellos (1972 a 1981) detenta en promedio algunas de las cifras más bajas en lo que respecta a la ocurrencia de acciones conflictivas y corresponde a una etapa de gobiernos dictatoriales durante los cuales la falta de libertades civiles y de respeto a los Derechos Humanos hizo que la población tuviera temor de hacer públicos sus reclamos o bien éstos fueron invisibilizados debido principalmente a la censura a los medios de prensa por parte del gobierno de turno. En contraste, entre 1982 y 1985 el número de eventos por año alcanza sus cifras más altas y corresponde a la etapa del retorno a la democracia y a una de las mayores crisis económicas, sociales y políticas vividas por el país dentro de todo el periodo de estudio. Por otro lado, entre 1986 y 1997 se observa cierta estabilización con tendencia a la baja en la cantidad de conflictos que se enmarca dentro de la etapa de las medidas de ajuste estructural en Bolivia, con la consecuente estabilización de la moneda, consolidación de las instituciones democráticas y una mayor certidumbre de la población debido a una mejora en sus condiciones de vida. A partir de 1998, el incremento anual en el número de conflictos coincide con un creciente desencanto de algunos sectores de la población que perciben que sus expectativas no son satisfechas, el impacto de una crisis económica internacional cuyos efectos no fueron adecuadamente administrados en el país, la falta de credibilidad de las instituciones democráticas y mayores demandas por una profundización de la descentralización en la administración del Estado, sobre todo a nivel regional. También influyó, en algunos momentos más que en otros, la forma en que los gobiernos administraron los conflictos. Ya mencionamos los efectos de la represión para reducir el número de conflictos, y también hay que tomar en cuenta que la permisividad puede estimularlos, como de hecho ocurrió en los gobiernos de Torres, de Siles Zuazo, de Bánzer, de Mesa y de Morales.

Veamos ahora en mayor detalle la forma en que evolucionaron las principales características de los conflictos sociales en Bolivia durante estos 38 años.

1. ÁMBITO GEOGRÁFICO Y LUGAR DE LOS CONFLICTOS

Como se aprecia en el Gráfico N° 2, en general, la mayor parte de los conflictos tuvo por escenario algún centro urbano en el país. Por supuesto, una parte de la diferencia se debe a la visibilidad que tiene el ámbito urbano para los medios que los cubren, pero la diferencia es muy grande como para que sea únicamente explicada por el sesgo en el registro. En este mismo gráfico se observa una suerte de tres grandes periodos que determinan las principales tendencias del ámbito geográfico de los conflictos en Bolivia, el primero de ellos va desde 1970 hasta los primeros

Gráfico N° 2



momentos de la vuelta a la democracia (1982 a 1984); el segundo se extiende desde este punto hasta los dos últimos años del primer gobierno de Sánchez de Lozada (1996 a 1997), y el tercero abarca desde esa fecha hasta el presente.

De esta suerte, observamos que durante el segundo periodo mencionado (1982-84 a 1996-97) la proporción de conflictos que tuvieron lugar en el área urbana fue menor que en el resto, y lo mismo ocurre con aquéllos que se desarrollaron en las zonas rurales del país. En contraposición a dichas tendencias, el porcentaje de conflictos que tuvieron un alcance nacional o de aquellos que involucraron a la totalidad de un departamento es significativamente mayor en este segundo periodo que durante los otros dos.

En el Gráfico N° 3 se aprecia la evolución que tuvieron los principales departamentos de Bolivia en tanto escenarios de los conflictos. Si bien las fluctuaciones en el corto o mediano plazo a veces son muy grandes, en el largo plazo sí es posible notar algunos desplazamientos con claridad. En este sentido, se aprecia que el departamento de La Paz ha sido, en su calidad de Sede de Gobierno, uno de los lugares más frecuentemente ocupados por la gente de todo el país para expresar sus demandas y reclamos, sin embargo, entre 1985 y 1996 lo fue en menor medida que en otros momentos, y lo mismo le acontece a partir de 2005 hasta la fecha. Cochabamba, por otro lado, se mantuvo relativamente estable durante casi todo el periodo estudiado, excepto por una breve disminución de sus porcentajes entre 1990 y 1994 y una tendencia al alza de los mismos a partir de 2004 aproximadamente. En contraste, el caso de Santa Cruz nos muestra una clara tendencia al incremento de los conflictos que se registran dentro de su territorio, y muy especialmente desde 1993, año a partir del cual, y muy frecuentemente, es el principal escenario de dichos eventos en el país en términos porcentuales, esto constituye sin duda un indicador de la emergencia de este departamento como principal motor del desarrollo nacional y, por ende, también de su creciente peso en la esfera política.

Gráfico N° 3



En cuanto al resto de los departamentos de Bolivia, la agregación de todos los eventos que tuvieron lugar en dichos escenarios nos muestra que estos fueron proporcionalmente más altos entre 1984 y 1997. Ahora bien, entre 1970 y 2005, de entre este grupo conformado por “el resto de los departamentos de Bolivia” sobresalen los de Oruro-Potosí, y en menor proporción Sucre-Tarija y Beni-Pando. Empero, a partir de año 2006 destacan muy especialmente la proporción de conflictos que tuvieron lugar en Chuquisaca y en menor medida en Tarija, hecho vinculado principalmente con los conflictos derivados de o en torno a la Asamblea Constituyente (Ver Cuadro N° 2 ²).

2. PRINCIPALES PROTAGONISTAS DE LOS CONFLICTOS

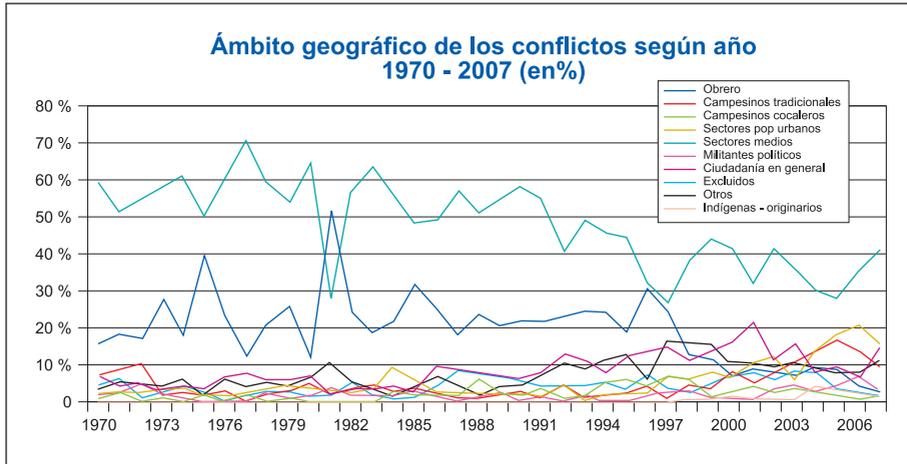
En el Gráfico N° 4 (Ver también Cuadro N° 3) se puede apreciar la mayor o menor medida en que los distintos actores sociales lideraron conflictos durante el periodo de estudio en términos porcentuales.

Los denominados “sectores medios” fueron, desde 1970 a la fecha, el grupo social con mayor presencia en el escenario de los conflictos sociales en Bolivia, sin embargo, lo fueron en mayor proporción entre 1970 y 1980 que corresponde a la época de las dictaduras en el país. Entre 1982 y 1994 su porcentaje de participación en eventos conflictivos disminuye ligeramente, pero es en promedio más alto que entre 1995 y el presente.

Ahora bien, el Gráfico N° 5 nos muestra que, de entre los “sectores medios”, fueron los estudiantes quienes lideraron la mayor cantidad de eventos entre

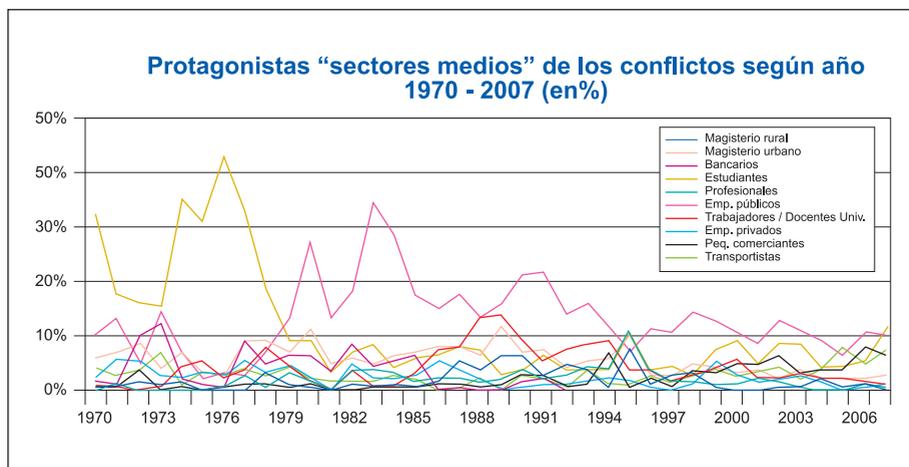
² Los Cuadros 1 al 9 pueden consultarse en Anexo 3.

Gráfico N° 4



1970 y 1978. A partir de 1979 y hasta la fecha, son los empleados públicos y asalariados quienes por lo general destacan en primer lugar, aunque los grupos de estudiantes retoman un fuerte protagonismo dentro el panorama de los conflictos sociales a partir de 1999 y con mayor intensidad los últimos dos años. Un hecho que sobresale es que aproximadamente a partir del 2000 los sectores de pequeños comerciantes aparecen en proporción cada vez mayor como protagonistas principales de eventos conflictivos, llegando incluso a ocupar el segundo lugar en términos porcentuales; algo parecido, aunque en menor escala, también se observa con el gremio de los transportistas. Por otro lado, durante gran parte del periodo de estudio también destacó el magisterio urbano, aunque a partir de 1996 lo hace en proporción cada vez menor. Otro sector social que gozaba de cierto peso en cuanto a la generación de conflictos sociales es el de los empleados de la banca estatal, pero a partir de 1986 tienden paulatinamente a desaparecer.

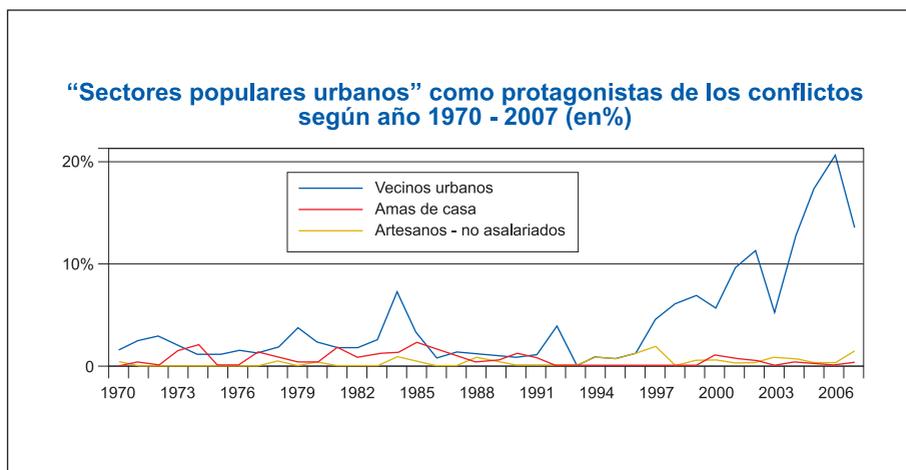
Gráfico N° 5



Retomando el Gráfico N° 4, se hace evidente que los obreros y sus organizaciones matrices fueron, durante gran parte del periodo de estudio, el segundo grupo social en importancia en la generación de conflictos en Bolivia. Esta participación alcanza sus cotas más altas el año 1981, que corresponde a la dictadura de García Mesa y al gobierno de Torrelio. Sin embargo, hay que matizar estos datos, ya que, por un lado, este año se corresponde con el de menor cantidad de conflictos registrados en nuestra base de datos (Ver Gráfico N° 1), lo cual se explica por el enorme grado de violencia y represión ejercido desde el Estado para con los grupos sociales que se atrevían a llevar adelante protestas o críticas contra este régimen; debemos recordar, además, que la represión fue especialmente dura con los estudiantes ³ que, hasta ese momento, eran el actor social que protagonizaba la mayor proporción de la acción social conflictiva en el país. A partir del año 1998, los obreros tiene una participación porcentual cada vez más pequeña en el escenario de los conflictos en el país, lo cual coincide con la capitalización de las empresas del Estado y, por tanto, con la disminución de la masa obrera dependiente del Estado y el consecuente debilitamiento de sus organizaciones representativas.

El Gráfico N° 4 también nos muestra el paulatino surgimiento de otros actores sociales a lo largo del periodo de estudio, cada uno de los cuales protagoniza una proporción cada vez mayor de los conflictos totales del país. Uno de esos grupos, bastante amplio y heterogéneo, es el que denominamos “sectores populares urbanos” y su presencia va creciendo en importancia a partir de 1997. Este sector social se muestra desagregado en el Gráfico N° 6, donde se evidencia que dicha emergencia se debe casi exclusivamente a un mayor protagonismo de los grupos de vecinos urbanos o sus organizaciones. Este hecho se explica no necesariamente por una mayor politización

Gráfico N° 6



3 Los grupos de estudiantes y sus organizaciones forman parte de los denominados “sectores medios”.

de las Juntas Vecinales en relación a las políticas estatales, sino también, porque estos grupos de ciudadanos ejercen, en una medida cada vez mayor, la protesta pública (marchas) o la presión (bloqueos) como métodos para ser atendidos en requerimientos relacionados con el desarrollo de sus respectivas zonas.

Por otro lado, el Gráfico N° 4 señala que, a partir del año 1992, se incrementa la participación del sector denominado “ciudadanía en general”⁴, aunque las cifras más altas se dan sobre todo entre 1992 y 2003, para luego experimentar un relativo descenso. En la mayoría de los casos, estos grupos de ciudadanos están liderados por las diferentes organizaciones cívicas del país⁵, por lo cual sus demandas son de tipo más bien regional.

Por último, cabe también mencionar el incremento paulatino del porcentaje de eventos protagonizados por los campesinos de las zonas agrícolas tradicionales a partir del año 1998, hasta el punto de que en 2005 ocupan el tercer lugar -y apenas un punto porcentual debajo del segundo- entre los actores sociales que mayor número de conflictos llevaron a cabo. Este cambio se explica en parte por la progresiva aparición en el escenario político y social boliviano de movimientos indígenas que reivindican su cultura y formas organizativas ancestrales y en claro rechazo a la forma de Estado-Nación surgida a partir de la Revolución Nacional de 1952.

3. OBJETIVO PRINCIPAL DE LOS CONFLICTOS

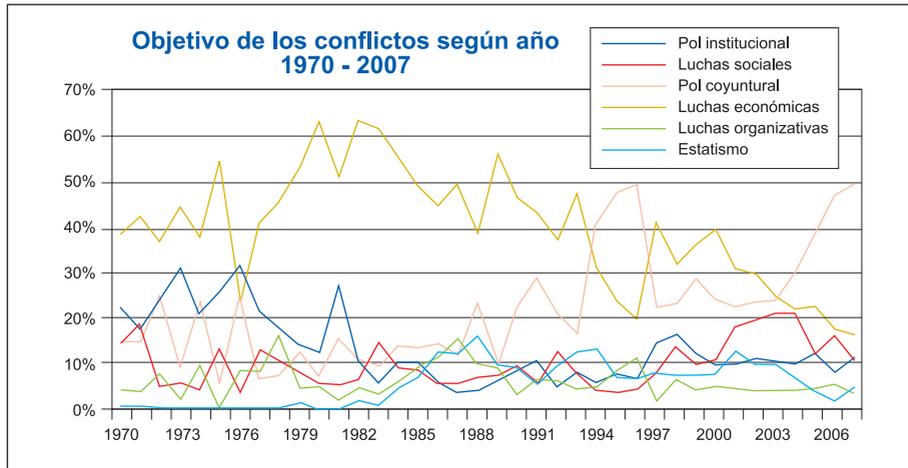
El Gráfico N° 7 indica cuáles fueron las principales reivindicaciones y demandas de los grupos que protagonizaron los conflictos dentro el periodo de estudio.

De acuerdo a los datos expuestos, la principal motivación de los conflictos en el país se relacionó con temas de índole económico, sin embargo, a partir del año 1994 lo es en proporción cada vez menor, tanto así que desde el 2003 hasta la fecha ocupa ya no el primero sino el segundo lugar como reivindicación más frecuente. Para entender este fenómeno debemos tomar en cuenta que dos de las demandas de tipo económico más usuales entre 1970 y 1996 fueron los reclamos por sueldos y salarios atrasados y las peticiones de aumento salarial (Ver Cuadro N° 6), a partir de esta fecha aumenta la proporción de conflictos que exigen al Estado apoyo a regiones o localidades específicas en temas de desarrollo o debido

4 Se emplea la denominación “ciudadanía en general” cuando los conflictos son protagonizados por representantes de la mayoría de los actores y sectores vivos de la población sin que pueda atribuirse a alguno de ellos el liderazgo o la conducción de los mismos de manera clara.

5 En nuestra base de datos, tanto la ciudadanía en general sin ningún tipo de liderazgo, así como la ciudadanía movilizada a partir de organizaciones de tipo cívico, son tomadas en cuenta sin diferenciación alguna hasta el año 2004, fecha a partir de la cual se ha procedido a contabilizarlas por separado, aunque de todas formas se las suma dentro de la variable agregada que también lleva el nombre de “ciudadanía en general” y que es la que se muestra en el Gráfico N° 4 (Ver también Cuadro N° 3 y Cuadro N° 4).

Gráfico N° 7



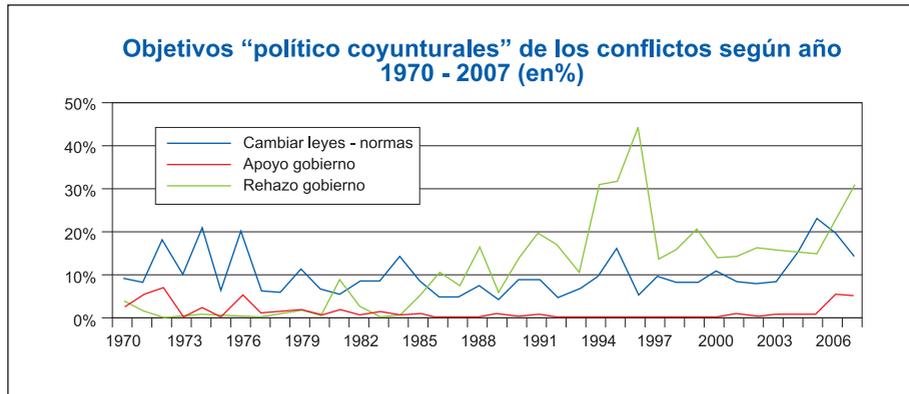
problemas por las regalías, así como también, aunque en menor medida, reclamos por una mayor estabilidad laboral o la creación de fuentes de empleo.

Entre 1970 y 1982, otra de las principales demandas de los grupos en conflicto se debió a temas de “política institucional”, sobre todo exigiendo mayores libertades democráticas y el respeto a los Derechos Humanos, lo cual va muy de acuerdo con el momento social y político que vivía el país durante esa etapa caracterizada por gobiernos dictatoriales de mano dura.

Ahora bien, a partir de la vuelta a la democracia, el segundo detonante más importante de los conflictos pasó a ser de tipo “político coyuntural”, no sólo eso, sino que su porcentaje respecto al total de eventos tiende a ser cada vez mayor. La mayor parte de este tipo de conflictos tiene por objetivo mostrar rechazo a las políticas, acciones o medidas tomadas por el gobierno y en menor medida las prefecturas o las alcaldías, o bien exigir el cambio o modificación de disposiciones legales (Ver Gráfico N° 8). Los datos nos revelan que este tipo de demandas y reclamos fueron especialmente intensos en dos momentos: el primero de ellos se da entre 1994 y 1996 y coincide con importantes cambios llevados adelante por el primer gobierno de Sánchez de Lozada, a saber, la capitalización, la participación popular y la reforma educativa, medidas que fueron en su momento fuertemente rechazadas por la población. El segundo momento ocurre a partir del año 2004 hasta el presente, y corresponde a la agudización de la crisis del Estado y de la institucionalidad democrática que vive Bolivia desde hace aproximadamente diez años.

Durante los últimos 9 años, también se observa una escalada de los conflictos relacionados con lo que hemos denominado “luchas sociales” y casi siempre relacionados con demandas de la población a fin de lograr una mayor participación en las designaciones, destituciones o cambios de funcionarios públicos. Sin embargo, a partir de 1997 cobra gran importancia y aumenta el porcentaje de

Gráfico N° 8



las “luchas sociales” originadas en problemas referentes a la expropiación o apropiación de bienes, terrenos, límites y territorio (Ver Gráfico N° 9).

Gráfico N° 9



4. FORMA O MANIFESTACIÓN DOMINANTE DE LOS CONFLICTOS

El Gráfico N° 10 da cuenta del cambio que se ha producido durante los últimos 37 años en la forma de los conflictos⁶, es decir, en la clase de acciones o medidas que asumen los grupos en conflicto a fin de visibilizar sus demandas o reclamos ante la sociedad y alcanzar sus objetivos.

6 Si bien un conflicto social puede tener más de una forma o pueden también éstas cambiar en el tiempo, por ejemplo de manifestaciones a huelga indefinida, se ha tratado en cada caso de identificar un método principal de lucha de acuerdo a la intensidad, grado de adhesión o tiempo durante el cual fue utilizado.

Gráfico N° 10



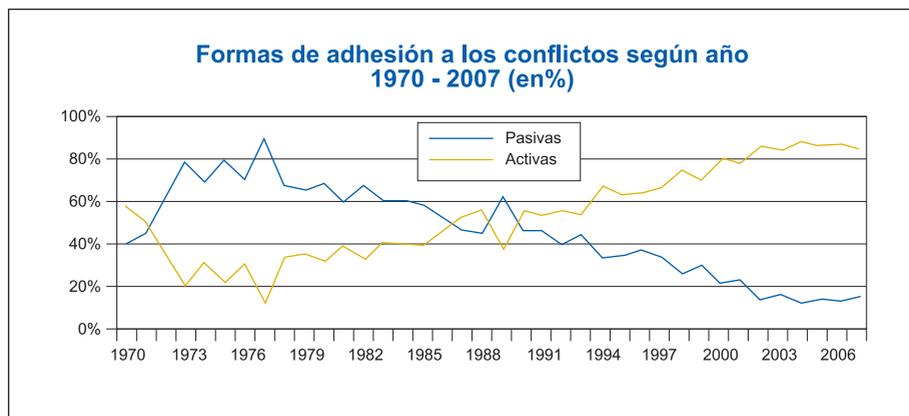
Un hecho que resalta en el Gráfico N° 10 es la paulatina disminución porcentual de las huelgas laborales en Bolivia, sobre todo a partir de 1995. Puesto que la posibilidad de ejercer este tipo de huelgas sólo les es dada a personas que gozan de una fuente laboral estable e inscrita dentro de la normativa correspondiente, la proporción cada vez menor en que se da dicha forma de conflictos puede explicarse en parte por la disminución de trabajadores asalariados en el país a partir de factores tales como la capitalización de algunas empresas estatales y la quiebra o desaparición de otras, el achicamiento del Estado y la liberalización de las leyes laborales entre otros, además de una mayor presencia política de los grupos que forman parte del sector informal de la economía.

El Gráfico N° 10 también nos muestra que a partir del año 1982 la proporción de marchas y manifestaciones respecto de otras formas de conflicto tiende a incrementarse significativamente y desde hace aproximadamente 14 años son el principal método de presión utilizado por los grupos en conflicto. Esta tendencia pueden deberse a que, junto con la recuperación de la democracia, llegaron aparejadas mayores libertades ciudadanas, y con ellas la posibilidad de protestar, disentir o plantearle reclamos y demandas al Estado. También a partir de 1982 existe un surgimiento de nuevos actores sociales en el país, pero también se hacen más visibles y más numerosos otros preexistentes, como los sectores de excluidos y marginados. Por otro lado, aumenta drásticamente el número de personas dentro el denominado “sector informal” de la economía. La mayor parte de los actores sociales recién mencionados no contaban, ni cuentan, con organizaciones sociales estables o fuertes que canalicen sus demandas y reclamos, ni tampoco con fuentes laborales estables, por tanto, es bastante lógico que estas personas recurran a la protesta callejera como método de plantear sus demandas

Este cambio en la composición de los actores que lideran los conflictos también puede explicar otras tendencias registradas en la forma que asumen los eventos conflictivos, tal es el caso de las huelgas de hambre, cuya importancia relativa es mayor a partir de 1989 que en los años anteriores, aunque tiende a disminuir últimamente. Así mismo, las “tomas y ocupaciones de instituciones, los motines y los enfrentamientos violentos” son notoriamente más frecuentes a partir de 1997, y en los dos últimos años fueron la segunda forma más frecuente que asumieron los conflictos. Aproximadamente también desde este mismo año la proporción de bloqueos de vías de comunicación, tanto en el área rural como urbana, ha aumentado respecto al total.

Todas las formas que asumen los conflictos que se han mencionado y que se han incrementado en términos porcentuales con el paso del tiempo corresponden a lo que hemos llamado “conflictos de adhesión activa”, puesto que implican que los sujetos hagan algo fuera de lo habitual, en contraste, los “conflictos de adhesión pasiva”, en los cuales los sujetos dejan de hacer algo habitual, como por ejemplo trabajar, son un porcentaje cada vez menor del total. En consecuencia, a lo largo de estos 38 años, los datos nos muestran una clara inversión del tipo de adhesión que requieren los conflictos (Ver Gráfico N° 11). Esto es un hecho preocupante, ya que los eventos de “adhesión activa” presuponen un mayor riesgo de violencia y de daños o perjuicios a terceros o para los actores involucrados en la acción conflictiva.

Gráfico N° 11



5. ADVERSARIO DE LOS CONFLICTOS

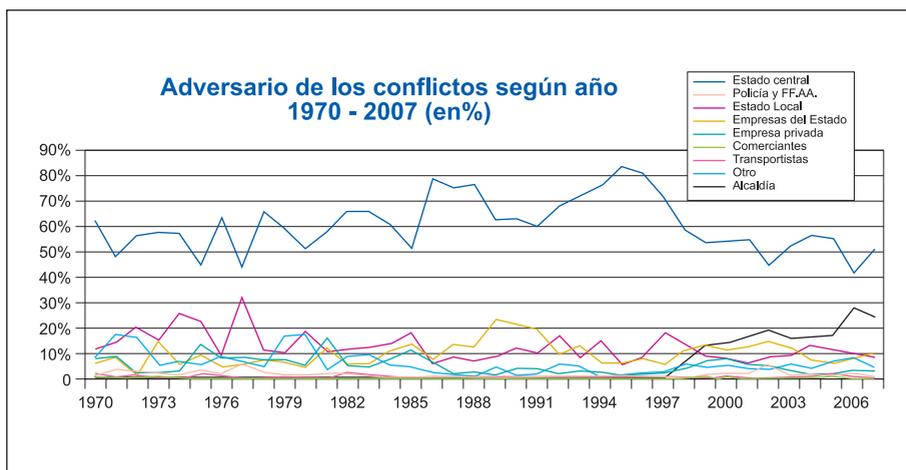
El adversario es un actor peculiar dentro del desarrollo de un conflicto, ya que, en general, es definido como tal por el grupo o grupos sociales que hacen estallar y luego lideran un conflicto social, ya sea porque exigen de él un determinado comportamiento o porque consideran que sus acciones y decisiones

les son perjudiciales ⁷. El Gráfico N° 12 nos presenta un panorama de aquellos actores sociales o instituciones que fueron mayormente identificados como el “adversario” a lo largo de los conflictos.

En términos generales, el Estado a nivel central ha sido el blanco más frecuente de las demandas y reclamos de la población. Sin embargo, si a esto le sumamos otros adversarios de índole estatal como los aparatos del Estado a nivel local ⁸, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, las empresas estatales y las alcaldías, tenemos como resultado que el 87,7% de todos los conflictos durante los últimos 38 años definieron como adversario o interlocutor al Estado en alguna de sus facetas (Ver Cuadro N° 9).

Hay que resaltar que las alcaldías del país, a partir de la Ley de Participación Popular, son receptoras cada vez más frecuentes de los reclamos y demandas de la población, y esta tendencia es especialmente notoria desde hace poco más de tres años.

Gráfico N° 12



7 Se debe tomar muy en cuenta que el “adversario” no necesariamente se convierte en un “interlocutor” para los grupos en conflicto durante el desarrollo de los mismos, es decir, no solamente no da respuesta o solución a lo que plantean aquellos, sino que tampoco toma parte activa en ninguna de las etapas del evento conflictivo. En estas ocasiones, o bien no existe ningún actor que se constituya como “interlocutor” o, en cambio, este rol lo asumen instituciones o actores de otra índole: algún Ministerio, la Iglesia o, con más frecuencia, la Policía Nacional, entre otros.

8 Estos son: Prefecturas, Corporaciones de Desarrollo, Alcaldías, etc. Cabe aclarar que desde el año 1998 las Alcaldías, debido a su creciente protagonismo, se registran de forma separada en nuestra base de datos.

5

LOS CONFLICTOS EN EL CONTEXTO POLÍTICO NACIONAL

Una manera útil de organizar la información concerniente a los conflictos sociales acaecidos en Bolivia durante los últimos treinta y ocho años es agrupándola tomando como referencia los diferentes regímenes presidenciales que cubre la base de datos, es decir, entre 1970 y enero de 2008. Ahora bien, algunos de ellos pueden ser juntados en función a su poca duración u otras características similares. Si bien cada uno de estos periodos es identificado de acuerdo a los gobernantes de turno, con ello se pretende denotar una determinada coyuntura histórica antes que responsabilizar a individuos específicos por los hechos registrados.

En este sentido, empecemos tomando en consideración el siguiente cuadro, el cual nos muestra la cantidad e intensidad de los conflictos registrados en cada uno de los regímenes presidenciales considerados.

Cuadro N° 10⁹

Número y porcentaje de eventos, cantidad de meses y promedio de eventos por mes según régimen presidencial

Periodo	Momento	# Eventos	% Eventos	# Meses	Promedio x mes
1-I-1970 a 20-VIII-1971	Ovando-Tórez	734	6,2	19,6	37,4
21-VIII-1971 a 21-VII-1978	Bánzer FPN-Bánzer FF.AA.	952	8,0	83,1	11,5
22-VII-1978 a 10-X-1982	Pereda-Padilla-Guevara-Gueiler-G. Mesa	1.107	9,3	50,6	21,9

Continúa

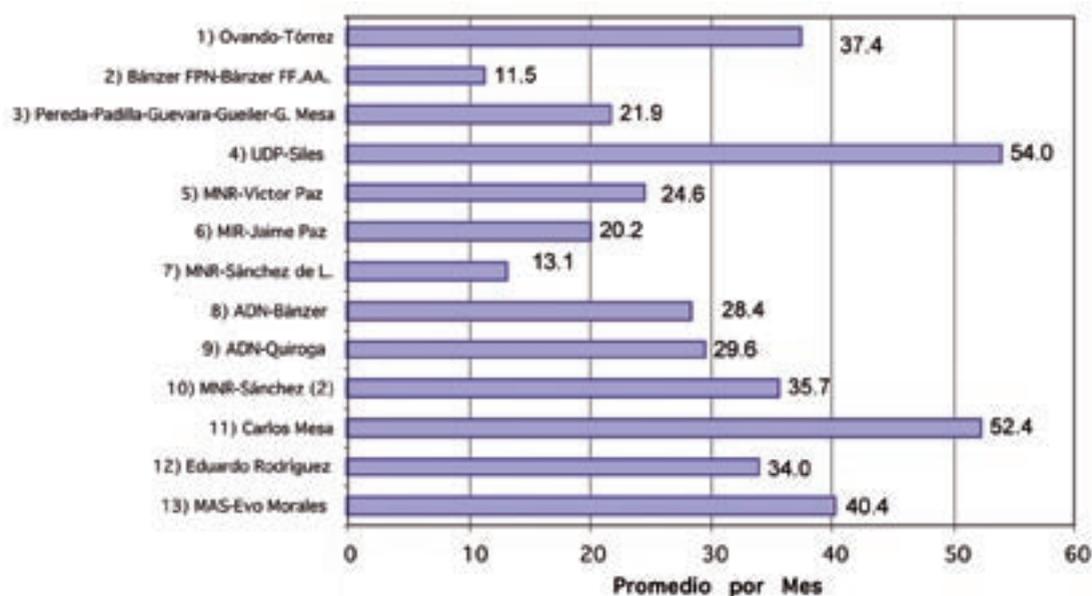
9 Todos los cuadros mencionados en este documento se hallan en Anexos 3 y Anexos 4, incluido el presente, por ello se ha preferido mantener su numeración original (la que aparece en anexos), a pesar del hecho de que es el único que se ha incorporado en la redacción principal de este documento. Con esto se pretende evitar errores al momento de consultar los cuadros.

Periodo	Momento	# Eventos	% Eventos	# Meses	Promedio x mes
11-X-1982 a 4-VIII-1985	UDP-Siles	1.825	15,3	33,8	54,0
5-VIII-1985 a 6-VIII-1989	MNR-Víctor Paz	1.180	9,9	48	24,6
7-VIII-1989 a 6-VIII-1993	MIR-Jaime Paz	968	8,1	48	20,2
7-VIII-1993 a 6-VIII-1997	MNR-Sánchez de L.	631	5,3	48	13,1
7-VIII-1997 a 6-VIII-2001	ADN-Bánzer	1.364	11,5	48	28,4
7-VIII- 2001 a 6-VIII-2002	ADN-Quiroga	355	3,0	12	29,6
7-VIII- 2002 a 17-X-2003	MNR-Sánchez (2)	518	4,4	14,5	35,7
18-X-2003 a 12-VI-2005	Carlos Mesa	1.042	8,8	19,9	52,4
13-VI-2005 a 22-I-2006	Eduardo Rodríguez	248	2,1	7,3	34,0
23-I-2006 a 31-I-2008	MAS-Evo Morales	969	8,1	24	40,4
Total		11.893	100,0	456,8	26,0

Fuente: Elaboración propia

De manera análoga, el Gráfico N° 13 nos muestra la intensidad, es decir, el promedio de conflictos nuevos por mes, en cada uno de los periodos presidenciales estudiados.

Gráfico N° 13
**Promedio de conflictos nuevos por mes según régimen presidencial
(enero 1970 - enero 2008)**

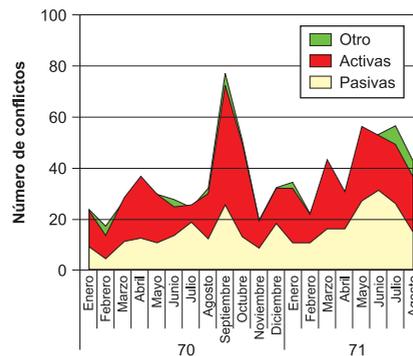


Fuente: Elaboración propia

Teniendo en mente los datos recién presentados, veamos, pues, las principales características de los conflictos sociales en cada uno de los períodos políticos considerados.

1. OVANDO-TÓRREZ (1 DE ENERO DE 1970 A 20 DE AGOSTO DE 1971)

Gráfico N° 14
Número de conflictos nuevos por mes "Ovando Tórrez"



Compuesta por una sucesión de gobiernos militares y autoritarios, durante esta etapa se hacen evidentes las primeras señales de la crisis del modelo de Estado del 52. También se caracterizó por la gran agitación y el enorme protagonismo de los sectores sindicalizados del país. En este sentido, el Cuadro N° 10 y el Gráfico N° 13 nos señalan que el promedio de eventos nuevos por mes, aunque con pronunciadas variaciones, fue de 37,4 lo que lo coloca en el cuarto lugar más alto de las 13 coyunturas estudiadas.

Gráfico N° 15



La mayor parte de los conflictos durante esta coyuntura se registraron en los principales centros urbanos del país (74,3%) (Ver Cuadro N° 11 ¹⁰). En tanto que el área rural fue escenario de tan sólo el 18,5% del total de los casos. Por otro lado, los departamentos con mayor número de eventos conflictivos fueron La Paz (29,3%), Santa Cruz (17,8%), Cochabamba (17,7%) y Oruro-Potosí ¹¹ (21%). También resalta, en este caso, que un 5,3% del total de eventos involucró al país en su conjunto (Ver Cuadro N° 12).

Por otro lado, los actores que protagonizaron la mayor parte de los conflictos estuvieron constituidos por los denominados “sectores medios” (55,9%) (Ver Gráfico N° 15 y Cuadro N° 13), sobre todo por los estudiantes (25,9%), los empleados públicos (12,1%) y el magisterio urbano (5,7%) (Ver Cuadro N° 14). También los obreros destacaron en este periodo (17,2%), principalmente fabriles (5,4%) y mineros (5%), así como los campesinos tradicionales ¹² (7,4%) y la “ciudadanía en general” (6,1%).

Como podemos observar en el Gráfico N° 16, la mayor parte de los conflictos se debieron a razones de índole económica (41,6%), y en especial aquellas derivadas del atraso en el pago de sueldos y salarios (13,9%), peticiones para que el gobierno apoye en temas de desarrollo a una región o localidad del país (8,4%), exigencias

Gráfico N° 16



10 Los Cuadros 10 al 19 pueden consultarse en Anexo 4.

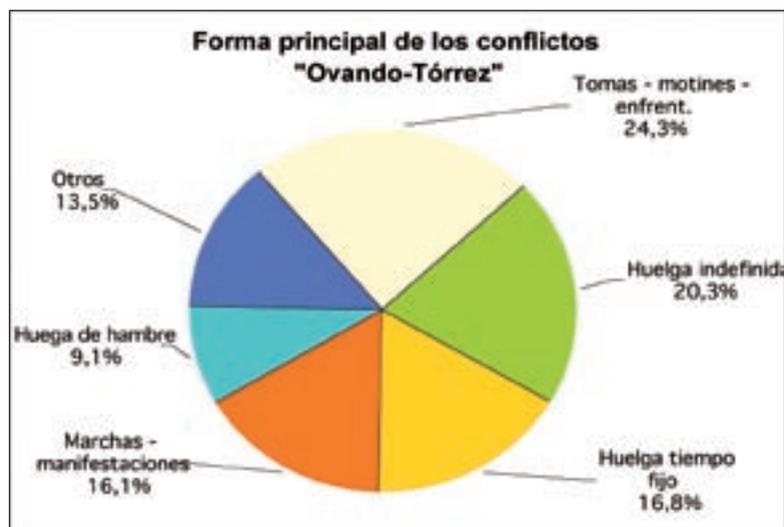
11 Algunos departamentos han sido tomados de a pares debido a que, en términos generales, individualmente registraban un número muy bajo de conflictos. Esta agrupación se la ha realizado en función a sus parecidos en términos geográficos. También se han realizado otro tipo de agregaciones cuando los conflictos abarcaban a ciertas regiones geográficas del país en su conjunto, como ser: Eje Central (La Paz-Cochabamba-Santa Cruz), Bloque Sur (Chuquisaca y Tarija) y Todo el País (los 9 departamentos).

12 Campesinos tradicionales son aquellos cuyas actividades no los colocan dentro del sector cocalero o colonizador.

por mejores condiciones de trabajo (7,6%) y aumentos salariales (6,3%) (Ver Cuadro N° 16). El tema “político institucional” fue también un disparador importante de los reclamos de la población (19,2%) y ello atañe a reclamos en el ámbito jurídico y de Derechos Humanos (8%), por mayores libertades democráticas (6%) y por la vigencia de leyes y normas establecidas (5,2%). En tercer lugar hallamos a las “luchas sociales” (16,3%), específicamente exigencias por una mayor participación ciudadana en designaciones, destituciones o cambios de funcionarios públicos (8,6%) y temas relacionados con la expropiación o apropiación de bienes, territorios, límites, etc. (5%). También destacaron los objetivos “político coyunturales” (13,8%), sobre todo pidiendo el cambio de las disposiciones legales vigentes en el país (8,6%).

A fin de visibilizar sus protestas, una parte importante de quienes protagonizaron conflictos optaron por las tomas de instituciones o motines (24,3%). Le siguieron las huelgas laborales indefinidas (20,3%) y las huelgas laborales por tiempo fijo¹³ (16,8%). También importantes fueron las marchas y manifestaciones (16,1%) y las huelgas de hambre (9,1%) (Ver Gráfico N° 17).

Gráfico N° 17



Si agregamos la forma que adoptan los conflictos de acuerdo al tipo de adhesión que estos requieren de sus participantes, obtenemos que el 54,2% de ellos fue de tipo “activo”, en tanto que los de adhesión pasiva representan un 42,4% del total (Ver Cuadro N° 18).

En más de la mitad de los conflictos, quienes los lideraron hicieron blanco de sus reclamos al Estado central (56,1%). En menor proporción encontramos

¹³ Cuando se anuncia y se lleva adelante una huelga laboral de 24, 48, 72 horas., etc.

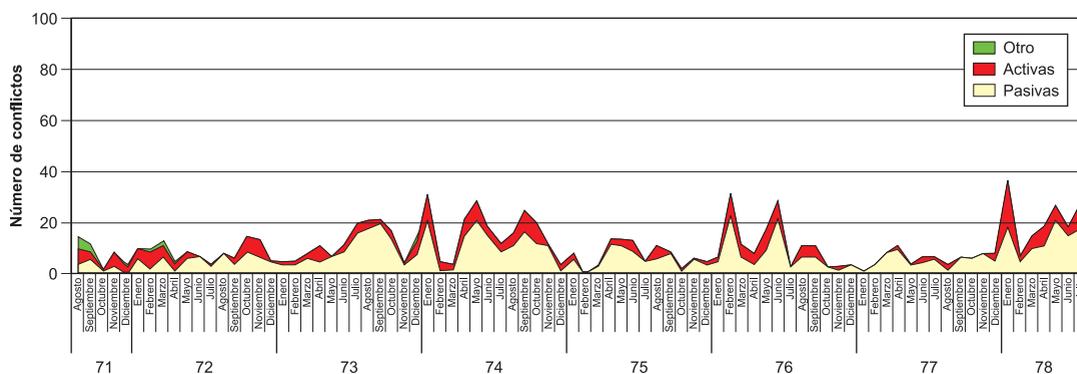
como adversario al Estado local (13,1%), la empresa privada (8%) y las empresas del Estado (7,2%) (Ver Cuadro N° 19).

2. BÁNZER FPN - BÁNZER FF. AA. (21 DE AGOSTO DE 1971 A 21 DE JULIO DE 1978)

Durante la mayor parte de esta etapa, constituida por el gobierno presidido por el entonces Coronel Bánzer, primero encabezando una coalición formada por partidos políticos y luego, ya sin ellos, con el apoyo institucional de las Fuerzas Armadas, Bolivia vivió un auge y expansión de la economía nacional basado principalmente en las elevadas cotizaciones de las materias primas en el mercado internacional, una fuerte inyección de capital extranjero vía préstamos y el congelamiento de los salarios. Sin embargo, salvo algunas excepciones, este flujo de capitales no fue adecuadamente utilizado en inversiones productivas o de infraestructura, y terminó en gran medida destinado al consumo suntuario de la cúpula política y los sectores más allegados al régimen. Acompañó a esta dinámica un creciente proceso inflacionario que devino en la pérdida del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores.

Gráfico N° 18

Número de conflictos nuevos por mes “Bánzer FPN - Bánzer FF.AA.”



Durante este mismo periodo se impuso la “doctrina de seguridad nacional” desde el Estado, que a fin de erradicar las ideologías y praxis de la “izquierda política” del escenario nacional se tradujo en una fuerte represión a los partidos políticos, a las organizaciones sindicales, a los estudiantes y, en general, a cualquier grupo que se opusiera al gobierno. Sin embargo, el deterioro de las condiciones económicas y las contradicciones del modelo de acumulación vigente produjeron una grave crisis a todo nivel en el país, de esta manera, y paulatinamente, se produjo un resurgimiento de la actividad política y de protesta de los sectores sindicales y populares.

De acuerdo a nuestros datos, durante este régimen se observa el menor promedio de conflictos nuevos por mes (11,5), claro indicador de las restricciones existentes a las libertades civiles, sobre todo cuando se trataba de expresar el descontento de la población, ya sea hacia el gobierno o a sus condiciones de vida, o en pos de lograr cambios sociales de diversa índole (Ver Cuadro N° 10 y Gráfico N° 13).

A lo largo de este periodo, la mayor parte de los conflictos tuvieron lugar en los principales centros urbanos del país (74,3%), y en menor proporción en el área rural (19,6%) (Ver Cuadro N° 11). En el ámbito departamental, la mayor parte de los eventos tuvo por escenario a La Paz (29,3%), seguida por Cochabamba (23%) y Oruro-Potosí (19,9%). Aunque también importante fue la proporción de casos registrados en el departamento de Santa Cruz (15,1%) (Ver Cuadro N° 12).

Tal y como se muestra en el Gráfico N° 19, los "sectores medios" lideraron casi seis de cada diez conflictos a lo largo de esta coyuntura, sobre todo los estudiantes (27,9%), los maestros urbanos (6,7%), los empleados públicos (6,5%) y los empleados bancarios (5,4%) (Ver Cuadro N° 13). Los obreros ocupan el segundo lugar en importancia (20,7%), sobre todo los mineros (10%) y fabriles (8,7%), lo cual representa un incremento significativo en su participación en comparación con el periodo anterior.

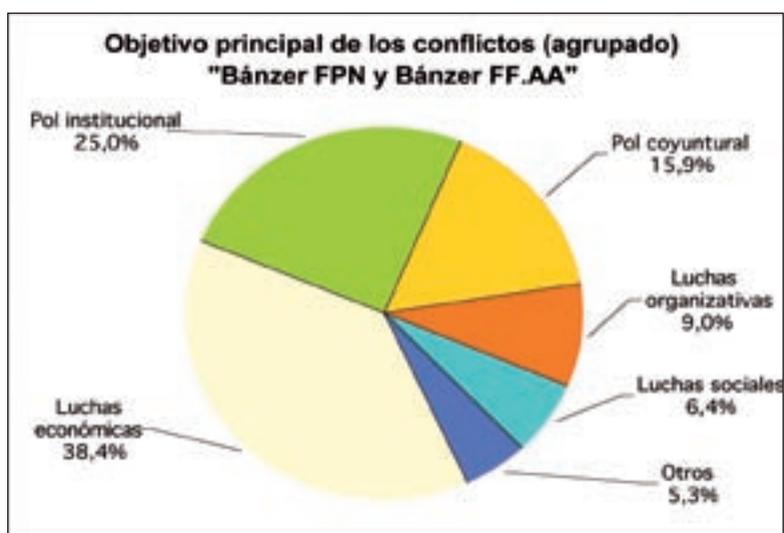
Gráfico N° 19



El principal móvil de las acciones conflictivas fueron las luchas económicas (38,4%) (Ver Gráfico N° 20), sobre todo las referidas al pago de sueldos atrasados (11,8%), pedidos de mejora de las condiciones laborales (9%), exigencias para aumentos salariales (5,5%), reclamos por las condiciones de consumo y canasta familiar de la población (4,8%) y al pedido de apoyo estatal de parte de regiones o localidades específicas en temas de desarrollo (4,3%) (Ver Cuadro N° 16). Tam-

bién el tema “político institucional” (25%) fue de gran relevancia durante esta coyuntura, y atañe a pedidos para la ampliación de las libertades democráticas (13,6%), reclamos de orden jurídico y de Derechos Humanos (7,4%) y por la vigencia y cumplimiento de las leyes y normativas del país (4,1%). El tercer lugar corresponde a los conflictos de orden “político coyuntural” (15,9%), especialmente los orientados a cambiar las leyes y normas del país (12,5%). Aunque en menor proporción, también se destacaron los eventos conflictivos relacionados con las denominadas “luchas organizativas” (9%), principalmente como muestra de apoyo o solidaridad con otros sectores sociales en conflicto. Y por último, cabe mencionar a las “luchas sociales” (6,4%), que en la mayor parte de los casos se relacionaba con demandas de la población por una mayor participación en la designación, destitución o cambio de funcionarios públicos (5,8%).

Gráfico N° 20



Durante este periodo presidencial, las huelgas laborales fueron la forma más común que adoptaron los conflictos (Ver Gráfico N° 21), en primer lugar las por tiempo definido (36,7%) y en segundo las por tiempo indefinido (22,9%), y a ellas debemos sumar las huelgas de hambre (8,4%). Otro medio común de expresar los conflictos fueron las marchas y manifestaciones (12,5%) y, por último, la declaratoria de “estado de emergencia” (6,5%).

La mayor parte de los conflictos durante este periodo demandaron una participación de tipo “pasiva” por parte de quienes los llevaron a cabo (69,7%) (Ver Cuadro N° 18), cabe resaltar que esta es la proporción más alta de este tipo de eventos registrada entre los 13 regímenes presidenciales estudiados. Una explicación a este hecho reside en la falta de garantías civiles y a los Derechos Humanos, motivo por el cual, los conflictos adoptaron una forma más cauta para

Gráfico N° 21



expresarse, en tanto que los de "adhesión activa" (28,4%) implican más riesgos personales para quienes los llevan a cabo.

Por otro lado, la mayor parte de los conflictos registrados tuvieron como destinatario de sus reclamos y demandas al Estado central (58,1%) (Ver Cuadro N° 19), y en menor proporción a las reparticiones estatales a nivel local (17,1%). Sin embargo, una proporción significativa de ellos establecieron como "adversario" a las empresas del Estado (5,7%), así como a las empresas privadas (5,5%).

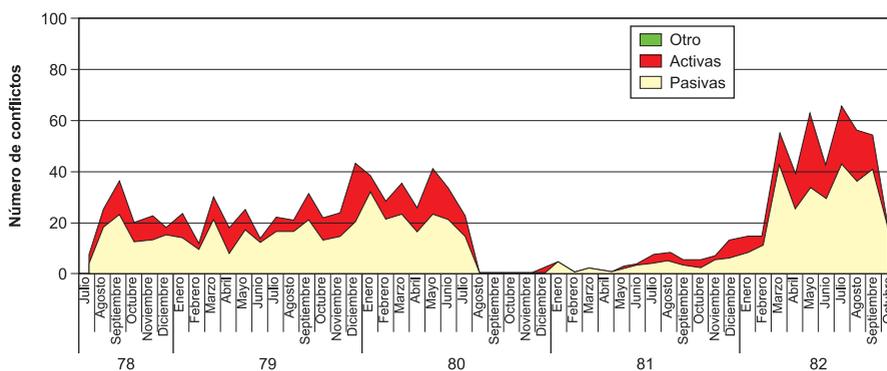
3. PEREDA-PADILLA-GUEVARA-GUEILER-GARCÍA MEZA. (22 DE JULIO DE 1978 A 10 DE OCTUBRE DE 1982)

Esta etapa es de una extraordinaria inestabilidad a todo nivel (Ver Gráfico N° 22). Como ejemplos de ello citemos algunas de las situaciones políticas por las que atravesó el país hasta antes del golpe de García Meza: elecciones fraudulentas, tres llamamientos a elecciones, cuatro golpes de Estado, el nombramiento de dos presidentes interinos y la realización de nuevos comicios electorales que al cabo no tuvo consecuencias debido a uno de los golpes de estado mencionados.

La escena política y social a lo largo de esta coyuntura es de transición a la democracia, por tanto, las expectativas electorales son una de las principales preocupaciones de los diferentes actores sociales. Debido a ello, gran parte de la acción colectiva y de los conflictos sociales giró en torno a establecer un estado de derecho y defenderlo de las amenazas golpistas. La crisis económica e inflacionaria contribuyó a agudizar las protestas a lo largo de estos años.

Gráfico N° 22

Número de conflictos nuevos por mes “Pereda - G. Meza”



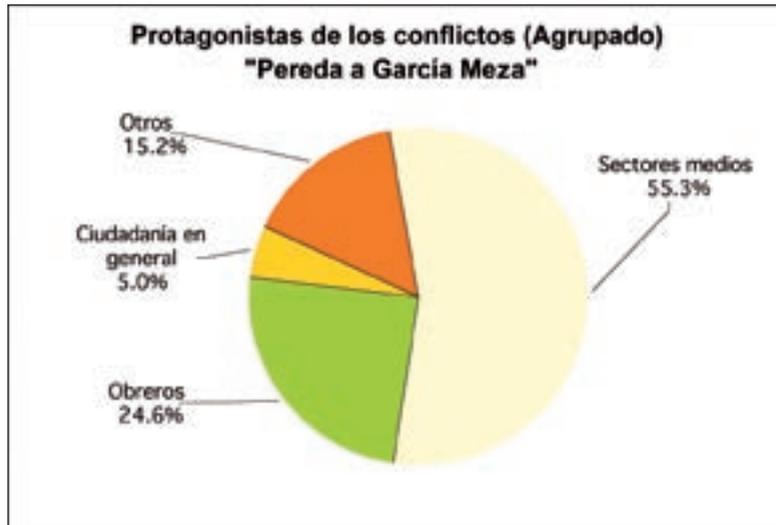
A finales del periodo, específicamente durante el gobierno de García Meza, se vivió la dictadura más violenta y represiva de cuantas hubo en la historia del país, además, durante este gobierno, la corrupción y los negociados por parte de los funcionarios del Estado crecieron de forma alarmante, así mismo, hubo una fuerte expansión de las actividades relacionadas con el narcotráfico que, en este caso, gozaba de la protección de algunos miembros del poder ejecutivo. La insostenible presión popular e internacional propició levantamientos militares y una sucesión de juntas de gobierno y gobiernos de facto. Por supuesto, la agregación que se hace (tomar como un solo régimen la etapa comprendida entre los gobiernos de Pereda a G. Meza) tiene solamente fines expositivos y no implica un desconocimiento a las profundas diferencias que hubo entre los diferentes gobiernos ni tampoco ignora los esfuerzos realizados por algunos de ellos, especialmente los que presidieron Wálter Guevara y Lidia Gueiler, por restablecer la institucionalidad democrática.

En comparación con la coyuntura anterior, a lo largo de ésta se observa un incremento en el promedio de conflictos nuevos por mes y que alcanza la cifra de 21,9 eventos mensuales en promedio (Ver Cuadro N° 10 y Gráficos N° 13 y 22).

Ahora bien, la proporción de los eventos registrados en los principales centros urbanos del país (73,3%) es muy parecida a la de los dos periodos anteriores, en cambio, la de aquéllos que tienen por escenario el área rural (12,9%) experimenta una caída, pero mucho más importante es el aumento del porcentaje de conflictos que abarcan a la totalidad del país (12,9%) (Ver Cuadro N° 11). A nivel departamental, fue en La Paz donde sucedieron la mayor parte de los eventos (29,8%), seguido por Cochabamba (22%) y Oruro-Potosí (15,9%), y en menor proporción Santa Cruz (13,6%) (Ver Cuadro N° 12).

Los protagonistas más importantes de los conflictos fueron los “sectores medios” (55,3%) (Ver Gráfico N° 24); en este caso, destacan los estudiantes (8,7%), los empleados públicos (17,3%), el magisterio urbano (7,8%) y los bancarios (7%) (Ver

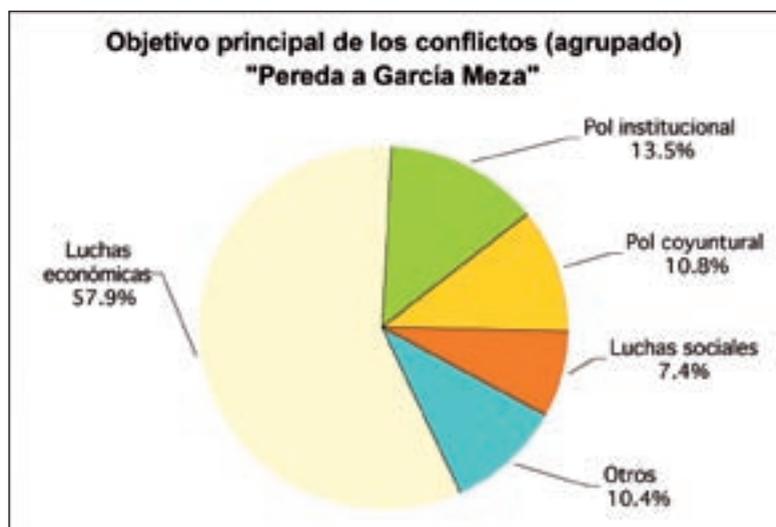
Cuadro N° 24



Cuadro N° 14). En segundo lugar tenemos a los obreros (24,6%), especialmente los fabriles (9%) y los mineros (7,5%). También podemos mencionar al sector denominado "ciudadanía en general" que representa el 5% de todos los casos registrados.

Una de las características de este régimen fue que la mayor parte de los conflictos giraron en torno a reivindicaciones de tipo económico (57,9%) (Ver Gráfico N° 25), sobre todo exigiendo un aumento salarial (16,8%) o el pago de sueldos atrasados (14,5%), aunque también fueron importantes los reclamos por mejores condiciones de trabajo (9,4%) y mejores condiciones de consumo o debido al incremento en el costo de la vida (7,5%) (Ver Cuadro N° 16). En menor proporción se dieron las reivindicaciones de tipo "político institucional"

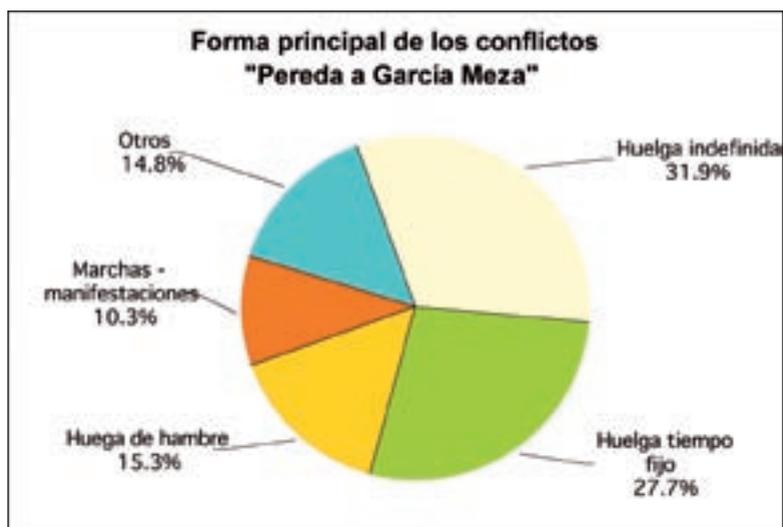
Gráfico N° 25



(13,5%), especialmente exigiendo mayores libertades democráticas (6,2%) y demandas de tipo jurídico o relativas a los Derechos Humanos (4,2%). Enseguida aparecen los conflictos relacionados con la “política coyuntural” (10,8%), más que todo abogando por el cambio de las leyes y normas dentro el país (8,3%). También podemos mencionar a las “luchas sociales” (7,4%), casi siempre exigiendo una mayor participación ciudadana en designaciones, destituciones o cambio de funcionarios públicos (7%).

También durante esta coyuntura fueron las huelgas la principal forma en que se visibilizaron los conflictos sociales en el país. Al respecto, el Gráfico N° 26 nos muestra que las más frecuentes fueron las huelgas laborales indefinidas (31,9%), seguidas por las huelgas laborales por tiempo definido (27,7%) y las huelgas de hambre (15,3%). Otra forma frecuente de los conflictos fueron las marchas y manifestaciones, que representan aproximadamente el 10% de todos los casos registrados.

Gráfico N° 26



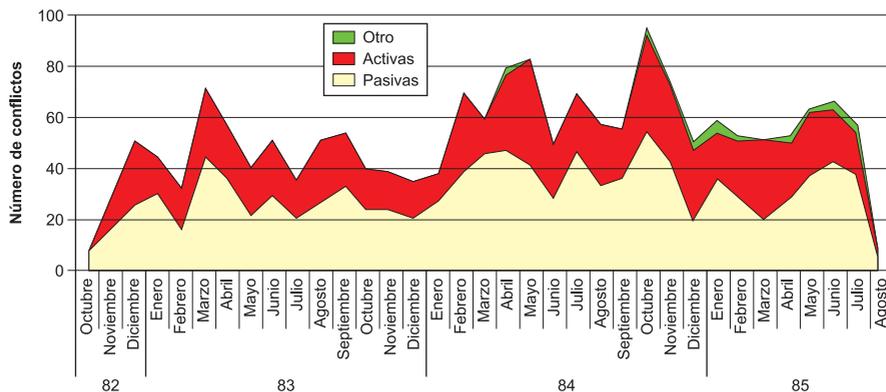
Este periodo, que agrupa a un buen número de gobiernos de facto o dictatoriales, también supuso restricciones autoritarias a las libertades democráticas y a los Derechos Humanos, por lo cual, no sorprende que la mayor parte de los conflictos sociales en Bolivia hayan sido del tipo “pasivo” (66,7%), aunque en menor proporción que en el periodo anterior (Ver Cuadro N° 18).

En relación al actor catalogado como “adversario” por los grupos que lideran conflictos, se observa que el Estado a nivel central lo fue en mayor medida que el resto (59,9%), y en menor proporción las reparticiones estatales a nivel local (12,3%), las empresas del Estado (6,7%) y la empresa privada (6,5%) (Ver Cuadro N° 19).

4. UDP - SILES. (11 DE OCTUBRE DE 1982 A 4 DE AGOSTO DE 1985)

Durante los tres años que abarcan este periodo se avanzó en la recuperación y consolidación de la democracia. En general, este gobierno se caracterizó por una gran debilidad institucional y política. Por otro lado, la crisis económica iniciada en 1977 alcanzó, a principios de esta etapa, uno de sus peores momentos, agravado por una política económica a veces imprudente y a veces demasiado vulnerable a las presiones corporativistas. La imposibilidad de solucionar la crisis y satisfacer al mismo tiempo las expectativas de la población y de las principales fuerzas políticas de entonces y atender las diversas orientaciones políticas y programáticas de los diversos socios de la coalición de gobierno, condujeron a un estado de total ingobernabilidad dentro del país.

Gráfico N° 27
Número de conflictos nuevos por mes "UDP - Siles"



A consecuencia de las razones expuestas, el régimen presidencial de Hernán Siles detenta el mayor promedio de conflictos nuevos por mes (54) de entre todos los considerados en este informe (Ver Cuadro N° 10 y Gráficos N° 13 y 27). Casi siete de cada diez eventos se registraron en los principales centros urbanos del país (Ver Cuadro N° 11), pero también es muy alta la proporción de aquellos que tuvieron un alcance nacional (12,3%) o que movilizaron a todo un departamento (7%).

De manera semejante a los periodos previamente considerados, el departamento escenario de la mayor parte de los conflictos fue La Paz (29,5%), seguido por Cochabamba (23%) y Santa Cruz (13,2%), y muy cerca de este último está la dupla Oruro-Potosí (12,7%) (Ver Cuadro N° 12).

Los sectores medios siguen siendo el principal protagonista de los conflictos en el país (57,2%) (Ver Gráfico N° 28), entre los cuales sobresalen los empleados públicos (28,1%), aunque también destacan los estudiantes (6%), el magisterio

Gráfico N° 28



urbano (5,8%) y los bancarios (5,6%) (Ver Cuadro N° 14). En segundo se sitúan los obreros (21,8%), especialmente los fabriles (5,9%) y los mineros (5,4%). También pueden mencionarse a los “sectores populares urbanos” (6,7%), predominando, en este caso, los vecinos urbanos o sus agrupaciones (4,8%).

La principal demanda de los grupos en conflicto fueron las luchas económicas (56,3%) (Ver Gráfico N° 29), y sobre todo referidas a aumentos salariales (22%), el pago de sueldos atrasados (13,9%), pero también con demandas a fin de mejorar las condiciones de consumo o canasta familiar de la población (6,9%) y sus condiciones de trabajo (6,2%) (Ver Cuadro N° 16). Las demandas de orden “político coyuntural” (11,8%) se debieron casi exclusivamente a tratar de cambiar las disposiciones legales

Gráfico N° 29

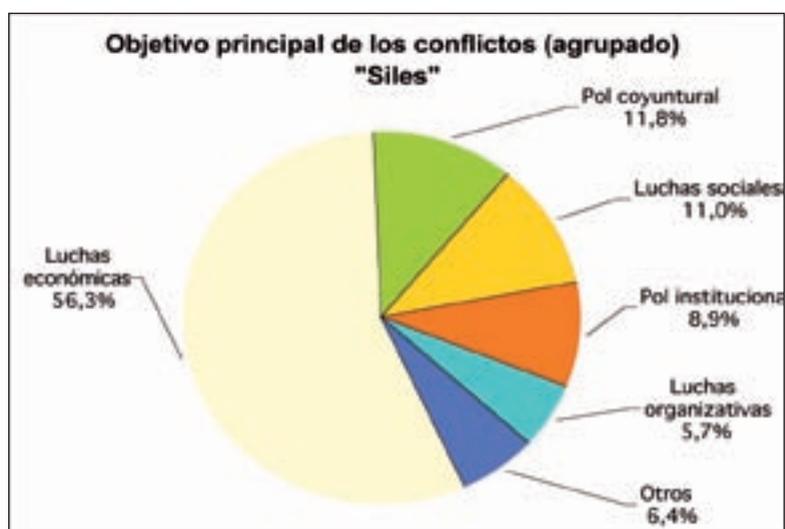
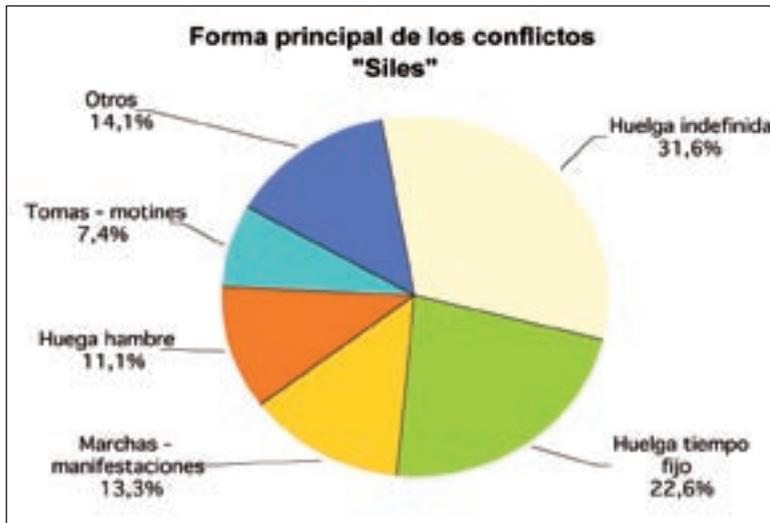


Gráfico N° 30



en vigencia en el país (11,1%), en tanto que las referidas a las "luchas sociales" (11%) se orientaron sobre todo a exigencias por una mayor participación de la sociedad en la designación, destitución o nombramiento de funcionarios públicos (8,8%). De manera general, también podemos mencionar como importantes a las reivindicaciones de tipo "político institucional" (8,9%) y a las luchas organizativas (5,7%).

Tal como muestra el Gráfico N° 30, las principales formas en que se visibilizaron los conflictos fueron las huelgas laborales por tiempo indefinido (31,6%) y por tiempo definido (22,6%), pero también relevantes fueron las marchas y manifestaciones (13,3%), las huelgas de hambre (11,1%) y las tomas de instituciones y sedes y motines (7,4%).

Cuando se agregan estos conflictos de acuerdo al tipo de adhesión que exigen de los participantes, observamos que, en comparación con regímenes anteriores, se da una importante alza de la proporción de aquellos de tipo "activo" (39,4%), en tanto que los de tipo "pasivo" decrecen hasta representar un 59% del total de casos registrados (Ver Cuadro N° 18).

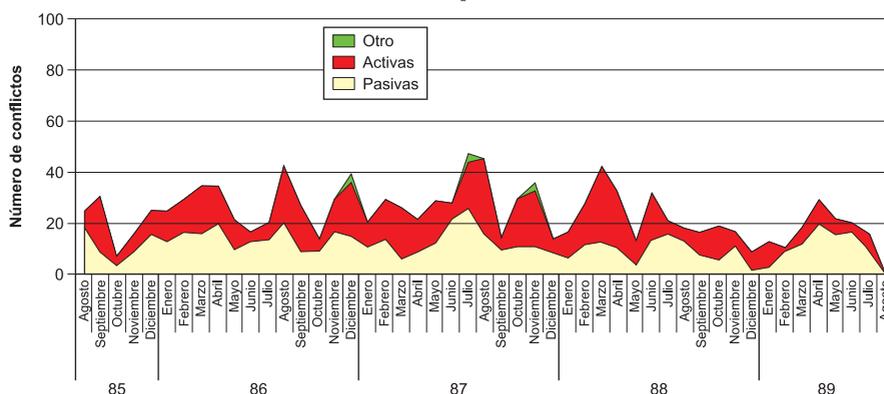
En este caso, también es el Estado a nivel central el principal destinatario de las demandas y reclamos de la población (58,6%), seguido por las reparticiones estatales a nivel local (14,4%), las empresas del Estado (9,5%) y la empresa privada (7,7%) (Ver Cuadro N° 19).

5. MNR - VÍCTOR PAZ. (5 DE AGOSTO DE 1985 A 6 DE AGOSTO DE 1989)

En este gobierno se da inicio al proceso de ruptura con el Estado del 52 y surge lo que podría denominarse el periodo neoliberal. Por otro lado, también se logra

Gráfico N° 31

Número de conflictos nuevos por mes "MNR - Víctor Paz"



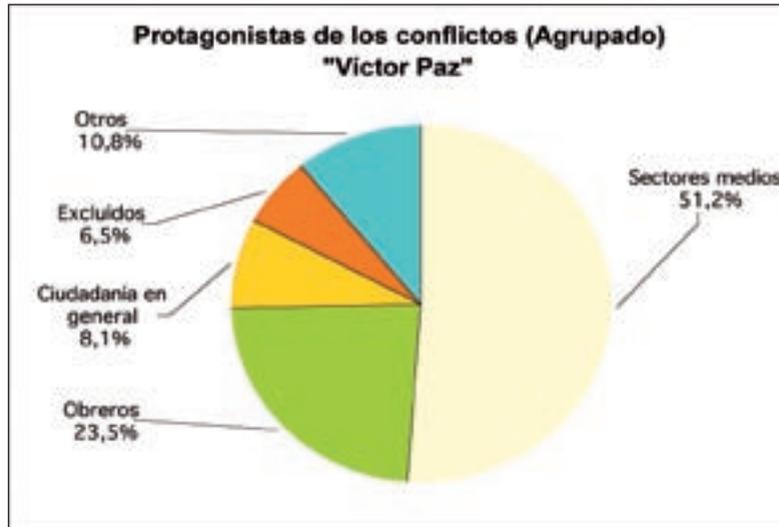
estabilizar la economía a través de una serie de medidas de ajuste estructural que tenían por objetivos principales reducir la intervención del Estado, racionalizar su funcionamiento e implementar una economía de mercado libre. A consecuencia de la implementación de este modelo se produjo un despido masivo de empleados públicos, especialmente de la minería estatal (que absorbía enormes subsidios), el congelamiento de los salarios, la reducción del gasto e inversión públicos, la recuperación de ingresos fiscales con una reforma tributaria y la utilización de los precios de los carburantes como variable de ajuste del presupuesto fiscal.

Aunque estas medidas causaron el inmediato rechazo de gran parte de la población, sin embargo, los sectores tradicionales de la sociedad civil (sindicatos obreros y campesinos) se hallaban debilitados debido, por un lado, a la responsabilidad que tuvieron en el fracaso de la gestión del Dr. Siles, y por otro a la reducción numérica de sus bases a raíz de los despidos, sobre todo en el caso de los mineros. Este hecho permitió al gobierno controlar las acciones que se opusieron a las medidas de ajuste estructural.

En comparación con el gobierno de Siles, y en concordancia con lo expuesto en los anteriores párrafos, el de Víctor Paz presenta una considerable caída en el promedio de conflictos nuevos por mes (24,6 casos) (Ver Cuadro N° 10 y Gráfico N° 13 y 31). Al mismo tiempo, los conflictos que se desarrollan en las zonas urbanas del país descienden a un 55,8% del total y, en contraste, se elevan aquellos que tienen un alcance departamental (15,7%) o nacional (15,8%), en tanto que los localizados en las áreas rurales se mantienen en una proporción parecida a la anterior (12,7%) (Ver Cuadro N° 11).

En el ámbito departamental, también experimenta una importante caída la proporción de conflictos registrados en La Paz (20,3%), manteniéndose similar el porcentaje correspondiente a Cochabamba (23,6%) y Santa Cruz (12,7%). En contraste, se elevan ligeramente las cifras correspondientes a Oruro-Potosí (17,9%) (Ver Cuadro N° 12).

Gráfico N° 32



El Gráfico N° 32 nos muestra que los “sectores medios” protagonizaron un poco más de la mitad de los conflictos registrados, especialmente los empleados públicos (15,5%), los trabajadores y docentes universitarios (9,4%), el magisterio urbano (8,2%) y los estudiantes (6,5%) (Ver Cuadro N° 14). Los obreros ocupan el segundo lugar (23,5%), y aquí destacan los mineros (7%) y, por primera vez hasta ahora, la agrupación matriz de todos ellos, la COB (5,1%). Enseguida tenemos al sector denominado “ciudadanía en general” (8,1%) y a los “sectores excluidos” (6,5%), principalmente a trabajadores despedidos o desempleados (4,4%).

Las “luchas económicas” fueron el principal detonante de los eventos conflictivos (47,6%), especialmente aquellas relacionadas a aumentos salariales (19,1%), el

Gráfico N° 33



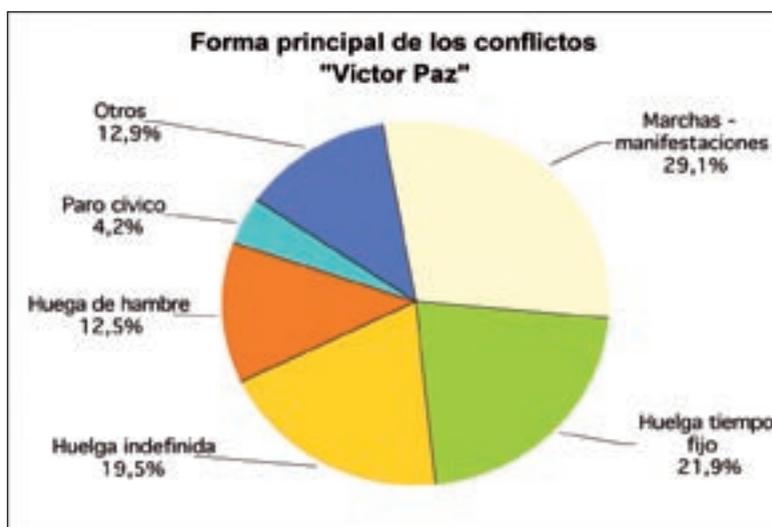
pago de sueldos atrasados (15,3%) o el apoyo de parte del Estado a una región o localidad del país en temas de desarrollo (6,7%) (Ver Gráfico N° 33 y Cuadro N° 16). En segundo lugar de importancia se sitúan los temas de “política coyuntural” (16,6%), entre los cuales, y por primera vez, sobresalen aquellos referidos al rechazo al gobierno y sus políticas (11,2%). El tercer puesto lo ocupan reivindicaciones de corte “estatista” (13,1%), es decir, en las cuales se pide la intervención o el apoyo del Estado en una institución o empresa dada. A continuación se encuentran las “luchas organizativas” (11,9%), sobre todo para expresar solidaridad y apoyo a otro actor o grupo social en conflicto (10,3%). Por último, entre las denominadas “luchas sociales” (6,2%), destacan las demandas de la población por una mayor participación en designaciones, destituciones o cambio de funcionarios públicos (4,7%).

Durante este gobierno, los conflictos sociales en el país asumieron principalmente la forma de marchas y manifestaciones (29,1%), seguidas por las huelgas laborales por tiempo definido (21,9%) e indefinido (19,5%), así como por las huelgas de hambre (12,5%). Resalta la relativamente alta proporción de paros cívicos (4,2%) llevados adelante en este periodo (Ver Gráfico N° 34).

De acuerdo al tipo de participación que los conflictos demandan de sus protagonistas, observamos que la mitad de ellos fueron de tipo “pasivo”, en tanto que los de tipo “activo”, si bien representan el 47,9% de todos los casos, muestran un significativo incremento respecto a los periodos anteriores (Ver Cuadro N° 18).

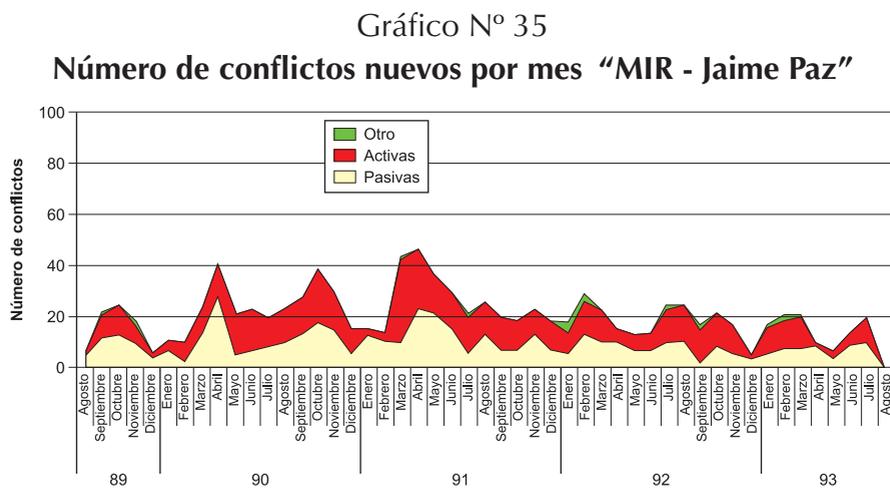
El Estado a nivel central, como principal adversario de los grupos en conflicto, lo fue en mayor medida que durante el anterior régimen, representando un 74,2% del total de casos registrados. En menor proporción lo fueron las empresas estatales (12,6%) y los aparatos del Estado a nivel local (6,4%) (Ver Cuadro N° 19).

Gráfico N° 34



6. MIR - JAIME PAZ. (7 DE AGOSTO DE 1989 A 6 DE AGOSTO DE 1993)

El gobierno de Jaime Paz fue en gran medida de continuidad respecto del anterior en lo que respecta a la política monetaria y la apertura de mercados. En este sentido, logró mantener la estabilidad de la moneda y logró avances en los principales indicadores sociales del país. Entre los rasgos negativos del periodo se pueden mencionar las denuncias de corrupción y negociados por parte de algunos funcionarios estatales, así como el escándalo de los “narcovínculos” que se reveló tiempo después.

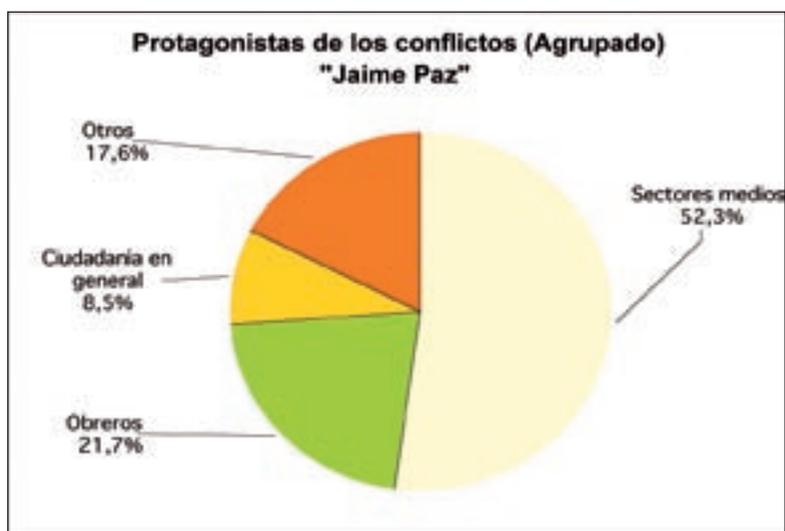


Durante el gobierno de Jaime Paz el promedio de conflictos nuevos por mes experimentó una ligera caída respecto al anterior periodo (20,2) y fue, además, el tercero más bajo entre todos considerados en este informe (Ver Cuadro N° 10 y Gráficos N° 13 y 35). Por otro lado, los datos nos señalan que la mayor parte de los eventos tuvieron lugar en los principales centros urbanos del país (55,1%), en tanto que los del área rural representan tan sólo un 14,7% de todos los casos. Hay que hacer notar, empero, que una significativa proporción de los conflictos involucró a la totalidad de un departamento (15%) o incluso al país en su conjunto (15,3%) (Ver Cuadro N° 11). Las luchas por la descentralización adquirieron un renovado vigor en esta etapa, bajo el liderazgo de los comités cívicos.

En relación al ámbito departamental de los conflictos se observan algunos cambios importantes, el primero de ellos se relaciona con Santa Cruz que es, por primera vez, el escenario más frecuente (19,9%) de las acciones conflictivas en el país, seguido por Cochabamba y Oruro-Potosí (cada uno de ellos con aproximadamente 17,5%) y luego La Paz (16,5%). Durante esta coyuntura también resaltan Chuquisaca-Tarija (6,9%) y Beni-Pando (6,3%) (Ver Cuadro N° 12).

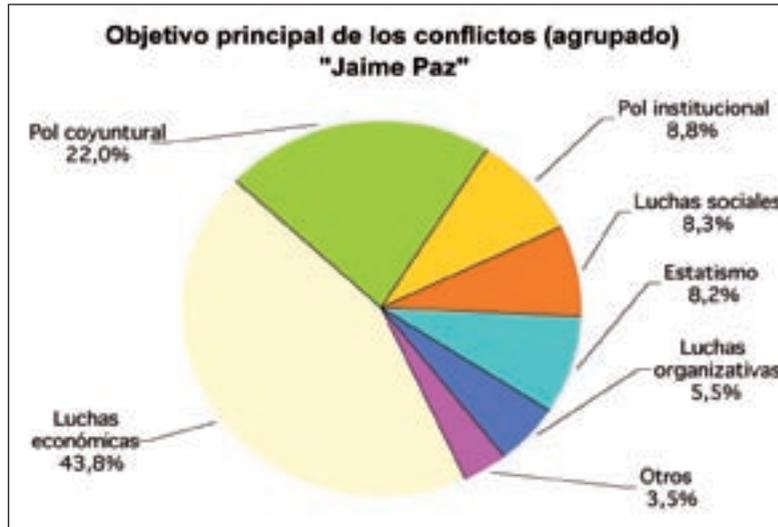
El actor que lideró más de la mitad de los conflictos a lo largo de este régimen presidencial fue el de los “sectores medios” (52,3%) (Ver Gráfico N° 36), sobre todo los empleados públicos (18,9%), aunque también destacan los trabajadores y docentes universitarios (7,7%), los maestros urbanos (7,1%), los estudiantes (5%) y los maestros rurales (4,5%) (Ver Cuadro N° 14). En segundo lugar encontramos a los obreros (21,7%), especialmente los mineros (6,5%), aunque también fue importante la proporción de eventos llevados adelante por la COB (5,6%). El siguiente actor en importancia lo constituye la “ciudadanía en general” (8,5%), pero lo que llama la atención es el gran porcentaje de actores dentro el rótulo de “otros” (17,6%), lo cual nos da a entender que fueron numerosos y variados los grupos que llevaron adelante acciones conflictivas durante este gobierno.

Gráfico N° 36



Poco más de cuatro de cada diez conflictos estuvieron motivados por razones de índole económica (Ver Gráfico N° 37), especialmente los concernientes a reclamos por sueldos atrasados (16,8%) y a pedidos de aumento salarial (12,2%) y, en menor cuantía, aquéllos que solicitaban apoyo del Estado en temas de desarrollo para una región o localidad dada (6,7%) o pedían mayor estabilidad laboral y fuentes de empleo (6,6%) (Ver Cuadro N° 16). Segundos en importancia fueron los objetivos de tipo “político coyuntural” (22%), sobre todo para mostrar rechazo al gobierno y sus políticas (14,6%) o para exigir el cambio o modificación de leyes o normas (7,2%). Al mismo tiempo, hubo numerosas movilizaciones en torno a temas de “política institucional” (8,8%), la mayor parte de ellas pidiendo el respeto y la vigencia de leyes y normas (5,2%). Así mismo, las denominadas “luchas sociales” (8,3%) estuvieron orientadas a solicitar una mayor participación en la

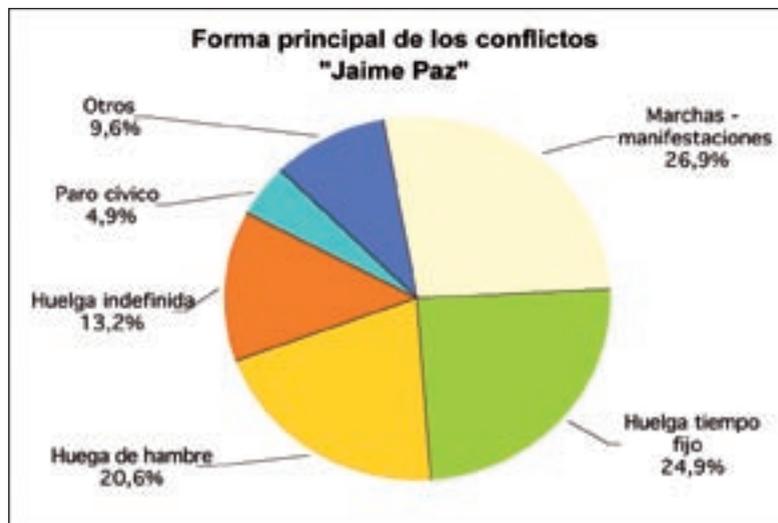
Gráfico N° 37



designación, destitución o cambio de funcionarios públicos (5,8%). Muy de cerca le siguen las demandas por un mayor “estatismo” (8,2%) y finalmente las “luchas organizativas” (5,5%).

Los principales medios utilizados por quienes lideraron los conflictos en esta coyuntura fueron las marchas y manifestaciones (26,9%), las huelgas laborales por tiempo definido (24,9%) y las huelgas de hambre (20,6%). Aunque también fueron frecuentes las huelgas laborales por tiempo indefinido (13,2%) y los paros cívicos (4,9%) (Ver Gráfico N° 38).

Gráfico N° 38



Si agregamos la forma de los conflictos por el tipo de adhesión que exige de sus participantes, observamos que los eventos de tipo “activo” fueron los más frecuentes durante este periodo (53,2%), lo cual, como ya se explicó, conlleva la posibilidad de un mayor grado de violencia durante el desarrollo de los mismos (Ver Cuadro N° 18).

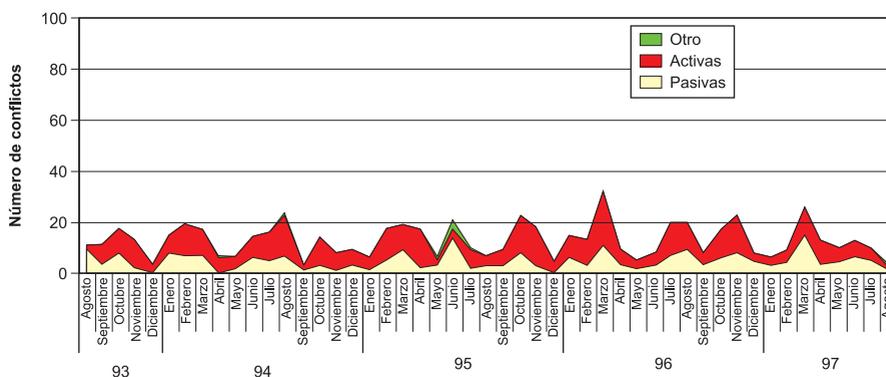
Finalmente, la mayor parte de quienes protagonizaron conflictos hicieron destinatario de sus reclamos al Estado central (63,2%), y en segundo lugar a las empresas estatales (16,9%), en tanto que las reparticiones del Estado a nivel local lo fueron en el 12,1% de los casos (Ver Cuadro N° 19).

7. MNR - SÁNCHEZ DE LOZADA 1. (7 DE AGOSTO DE 1993 A 6 DE AGOSTO DE 1997)

Este periodo se caracteriza por las importantes reformas políticas y económicas que fueron implementadas, a saber: la capitalización de las empresas estatales, la reforma educativa y la participación popular.

Gráfico N° 39

Número de conflictos nuevos por mes “MNR - Sánchez de Lozada 1”



Si bien hubo rechazo a tales reformas por parte de algunos grupos y sectores, la cantidad total de conflictos fue la menor registrada en tiempos de democracia. Los datos parecen confirmar que los sectores sindicales tradicionales siguieron debilitándose, descendiendo las acciones sociales conflictivas protagonizadas por tales entidades.

Como se adelantó, durante este periodo de gobierno el promedio de conflictos nuevos por mes experimentó una notable disminución (13,1) siendo el segundo más bajo de entre los 13 periodos estudiados y el más bajo desde el retorno a la democracia en 1982 (Ver Cuadro N° 10 y Gráficos N° 13 y 39).

En lo que hace al ámbito geográfico, la mayor parte de los eventos se registraron en los principales centros urbanos de Bolivia (55,8%), en tanto que al área rural le corresponde tan sólo el 9,8% del total. Destaca el gran incremento de conflictos que abarcaron la totalidad de un departamento (20,1%), pero también fue importante la proporción de ellos que involucró a todo el país (14,3%) (Ver Cuadro N° 11). Por otro lado, el departamento donde se registró la mayoría de las acciones conflictivas fue Santa Cruz (26,9%), seguido por Cochabamba (21,7%) y La Paz (17,6%) y, en menor proporción, Oruro-Potosí (9,7%) y Sucre-Tarija (6%) (Ver Cuadro N° 12).

Los “sectores medios” lideraron la mayor parte de los conflictos durante este periodo (38,8%), entre ellos destacan los empleados públicos (10,6%), los estudiantes (5,7%), el magisterio urbano (5,5%) y los trabajadores y docentes de las universidades (5,5%) (Ver Gráfico N° 40 y Cuadro N° 14). En segundo lugar, y en mayor proporción que en los anteriores regímenes presidenciales, aparecen los obreros (25,2%), sobre todo a través de sus entes matrices, como la COB (11,1%) y la COD (5,4%). Otros actores relevantes fueron la “ciudadanía en general” (12%), los campesinos cocaleros o colonizadores (4,9%), y los denominados “sectores excluidos” (4,8%) integrado por desempleados, rentistas, jubilados, etc. En el caso de los campesinos cocaleros y colonizadores hay que agregar que la proporción en que lideran conflictos durante este gobierno es mayor que en cualquiera de las otras coyunturas consideradas en este informe.

Gráfico N° 40



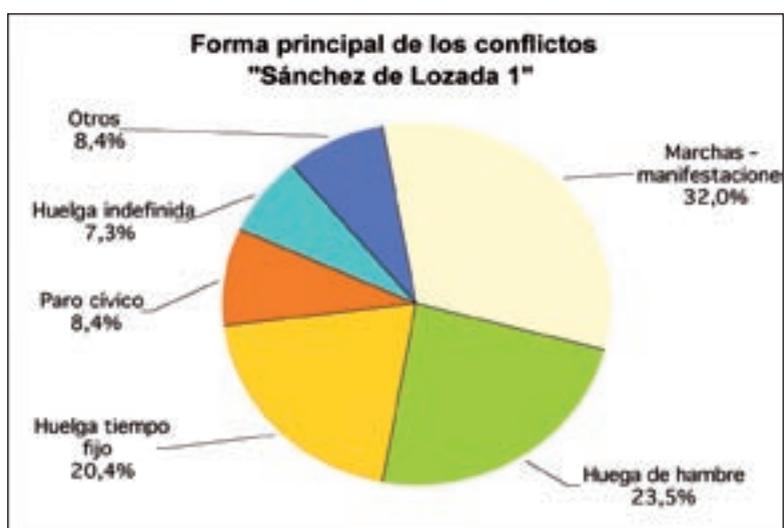
En relación a los objetivos perseguidos por los grupos sociales en conflicto, por primera vez hasta ahora las reivindicaciones de tipo económico no son las más frecuentes (28,7%), habiendo estado ellas orientadas sobre todo a pedidos de aumento salarial (8,9%), reclamos por retrasos en la cancelación de sueldos (7,3%),

demandas para que el Estado apoye a una región o localidad en temas de desarrollo (5,9%) y pidiendo mayor estabilidad laboral y más empleos (5,5%) (Ver Gráfico N° 41 y Cuadro N° 16). En cambio, el objetivo más recurrente de los conflictos estuvo relacionado con temas de “política coyuntural” (40,1%), principalmente para expresar el rechazo al gobierno y sus políticas (31,1%) o para tratar de cambiar las leyes y normas del país (9%). En menor proporción, también destacaron las acciones conflictivas de orden “estatista” (9,2%), “político institucional” (7,6%), las “luchas organizativas” (6,7%) y las “luchas sociales” (4,8%).

Gráfico N° 41



Gráfico N° 42



Los eventos registrados adoptaron sobre todo la forma de marchas y manifestaciones (32%), huelgas de hambre (23,5%) y huelgas laborales por tiempo definido (20,4%), y en menor proporción se dieron bajo la modalidad de paros cívicos (8,4%) o huelgas laborales indefinidas (7,3%) (Ver Gráfico N° 42). Si tomamos en cuenta el tipo de adhesión que los conflictos exigen de sus participantes, los datos revelan un importante incremento de los de tipo “activo” (61,8%) que son, justamente, los que conllevan un mayor riesgo de violencia durante su desarrollo (Ver Cuadro N° 18).

El Estado central fue destinatario de los reclamos y demandas de ocho de cada diez de los casos registrados, y en mucha menor proporción lo fueron las reparticiones estatales a nivel local (8,7%) y las empresas del Estado (6,3%) (Ver Cuadro N° 19).

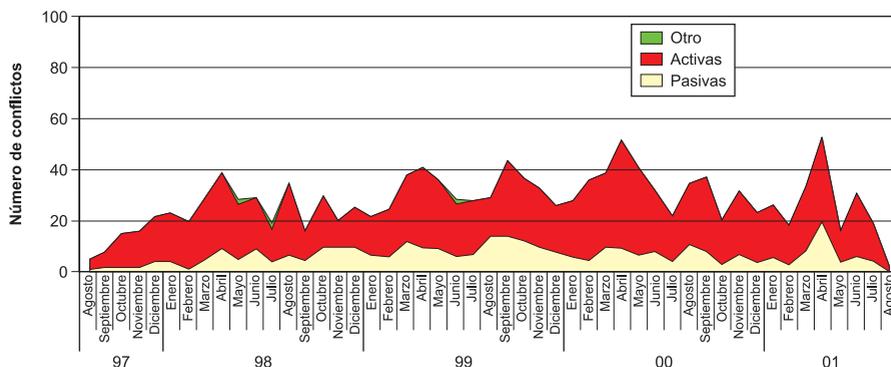
8. ADN - BÁNZER. (7 DE AGOSTO DE 1997 A 6 DE AGOSTO DE 2001)

Durante este gobierno, el segundo de Bánzer, se llevaron adelante modificaciones a algunas de las reformas estructurales ejecutadas por su predecesor, tales como a la Ley del Poder Ejecutivo, a fin de aumentar el número de ministerios, o hacer reformas en el sistema regulador, y también se procedió con la eliminación del Bonosol y la creación del Bolivida. Así mismo, se implementaron reformas institucionales, entre ellas la creación del Tribunal Constitucional, del Consejo de la Judicatura y de la Defensoría del Pueblo.

Otros factores relevantes a lo largo de este gobierno fueron la recesión económica, las denuncias de negociados y actos de corrupción por parte de funcionarios públicos, el surgimiento de nuevas fuerzas políticas y la crisis del sistema

Gráfico N° 43

Número de conflictos nuevos por mes “ADN - Bánzer”



de partidos políticos, sobre todo de los tradicionales. Sin embargo, un hecho decisivo durante este periodo fue la enfermedad, renuncia y muerte del Presidente.

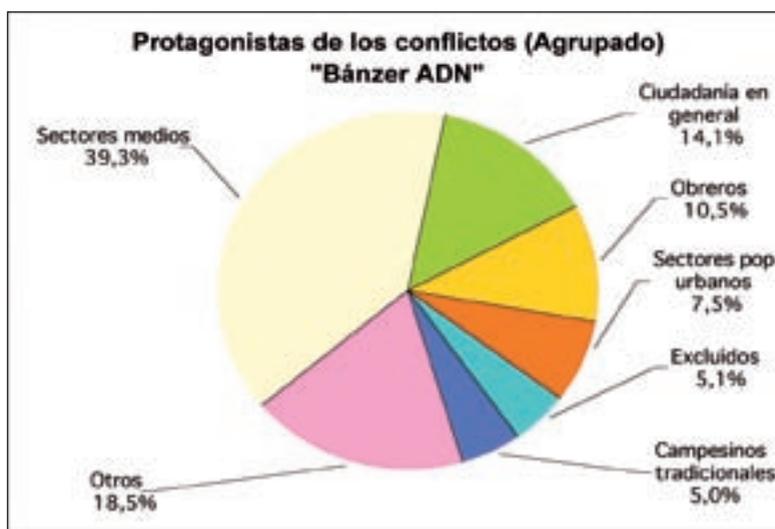
La aparición de nuevas fuerzas políticas y nuevos actores sociales, muchos de ellos portadores de visiones culturales y programáticas muy diferentes a las vigentes, derivaron en una intensificación de los conflictos sociales, algunos de los cuales se manifestaron con actos de mucha violencia e involucraron amplios sectores de la población, entre ellos, los más importantes fueron la “Guerra del Agua” en Cochabamba, y el “Septiembre Negro” en todo el eje troncal del país, ambos en el año 2000.

En consecuencia, la cifra promedio de conflictos nuevos por mes se eleva significativamente durante este régimen presidencial (28,4 eventos). (Ver Cuadro N° 10 y Gráficos N° 13 y 43). Por otro parte, en aproximadamente siete de cada diez casos los eventos tuvieron lugar en los principales centros urbanos del país, en tanto que al área rural le corresponde un 18,1% del total. Así mismo, una importante proporción de los conflictos tuvieron un alcance nacional (7,6%) o implicaron a todo un departamento (5,3%) (Ver Cuadro N° 11).

El departamento de Santa Cruz fue el principal escenario de las acciones conflictivas durante esta coyuntura (31,2%), seguido por La Paz (21,6%) y Cochabamba (20%) y, en menor escala, Oruro-Potosí (10,2%) y Sucre-Tarija (6,4%) (Ver Cuadro N° 12).

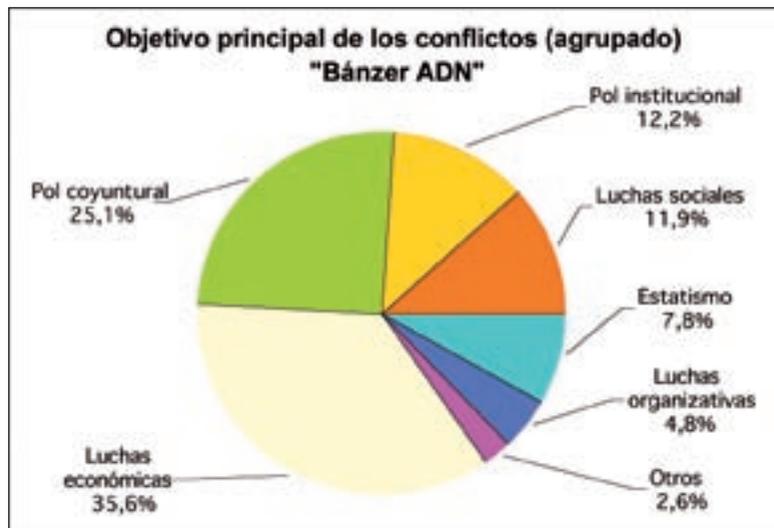
Los principales protagonistas de los conflictos fueron los “sectores medios” (39,3%), destacan entre ellos los empleados públicos (12,4%), los estudiantes (6,4%), los trabajadores y docentes universitarios (4%), el magisterio urbano (4,1%) y los pequeños comerciantes (3,8%) (Ver Gráfico N° 44 y Cuadro N° 14). En segundo lugar se encuentra la “ciudadanía en general” (14,1%), seguido por los

Gráfico N° 44



obreros (10,5%), los “sectores populares urbanos” (7,5%), los sectores “excluidos” (5,1%) y los campesinos tradicionales (5%). Llama la atención el relativamente elevado porcentaje de actores bajo el rótulo de “otros” (18,5%); esto se debe a que los conflictos sociales durante esta coyuntura involucraron a numerosos y muy diversos sectores y grupos de la población, la mayor parte de ellos sin una tradición de luchas sociales u organizados de manera difusa y, por tanto, difíciles de ser incluidos dentro de grupos o actores sociales más comunes de identificar.

Gráfico N° 45



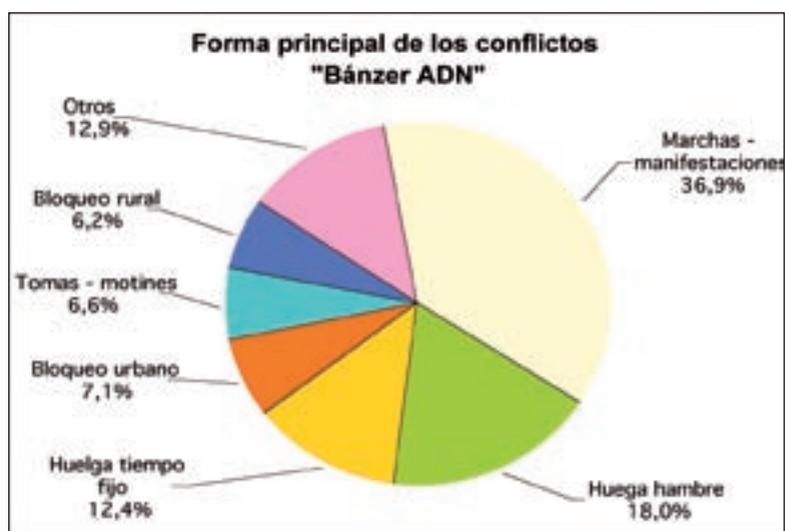
Las “luchas económicas” fueron el principal detonante de los conflictos (35,6%), especialmente pidiendo que el Estado apoye a determinadas regiones o localidades en temas de desarrollo (10,3%), o por reclamos debido a sueldos atrasados (9,5%) (Ver Gráfico N° 45 y Cuadro N° 16). En segundo lugar se hallan las reivindicaciones de tipo “político coyuntural” (25,1%), ya sea para expresar rechazo al gobierno y sus políticas (16,1%) o para exigir la modificación de las leyes y normas del país (8,9%). También destacan los eventos motivados por razones de orden “político institucional” (12,2%), sobre todo pidiendo el respeto y el cumplimiento normatividad legal vigente en Bolivia (7,7%). Aunque en menor proporción, también se generaron conflictos relacionados con las “luchas sociales” (11,9%), el “estatismo” (7,8%) y las “luchas organizativas” (4,8%).

Como se aprecia en el Gráfico N° 46, la mayor parte de las acciones conflictivas se dieron bajo la forma de “marchas y manifestaciones” (36,9%), huelgas de hambre (18%) y huelgas laborales por tiempo definido (12,4). Otras medidas frecuentes fueron los bloqueos de vías de comunicación en el área urbana (7,1%), la toma de instituciones o motines (6,6%) y los bloqueos de vías en el área rural

(6,2%). Agregando estos eventos por el tipo de participación que exigen de sus participantes, se tiene que los de “adhesión activa” son casi el 75% del total. Recordemos que este tipo de conflictos, por lo general, implican un mayor riesgo de violencia en su desarrollo (Cuadro N° 18).

El Estado a nivel central fue definido como “adversario” de los grupos en conflicto en la mayor parte (54,8%) de los casos registrados, y en menor escala lo fueron las empresas estatales (11,9%), las alcaldías (11,6%), las reparticiones del Estado a nivel local (9,9%) y la empresa privada (5,4%) (Ver Cuadro N° 19).

Gráfico N° 46



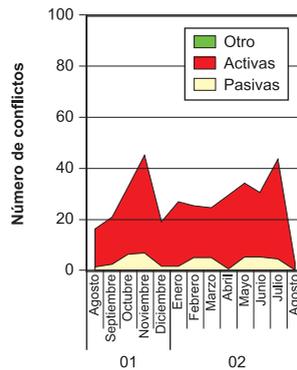
9. ADN - QUIROGA. (7 DE AGOSTO DE 2001 A 6 DE AGOSTO DE 2002)

El gobierno de Quiroga fue breve pues se limitó a completar el período gubernamental de Bánzer. Este periodo estuvo afectado por la crisis económica internacional y sintió con más fuerza las consecuencias de la recesión. A esto contribuyó la caída internacional de los precios de las materias primas.

En otro ámbito, durante este régimen continuaron los conflictos sociales surgidos durante el gobierno de Bánzer, pero también se agudizaron aquellos concernientes a la tierra, sobre todo entre los movimientos de los “sin tierra” y los propietarios de éstas, y los relacionados a la política de erradicación de cocales.

El promedio de conflictos nuevos por mes durante este régimen presidencial es apenas un poco más alto que el de su antecesor y es de 29,6 eventos (Ver Cuadro N° 10 y Gráficos N° 13 y 47). En cuanto al ámbito geográfico, el Cuadro N° 11 nos señala que el principal escenario de las acciones conflictivas fueron los

Gráfico N° 47
Número de conflictos nuevos por mes “ADN - Quiroga”

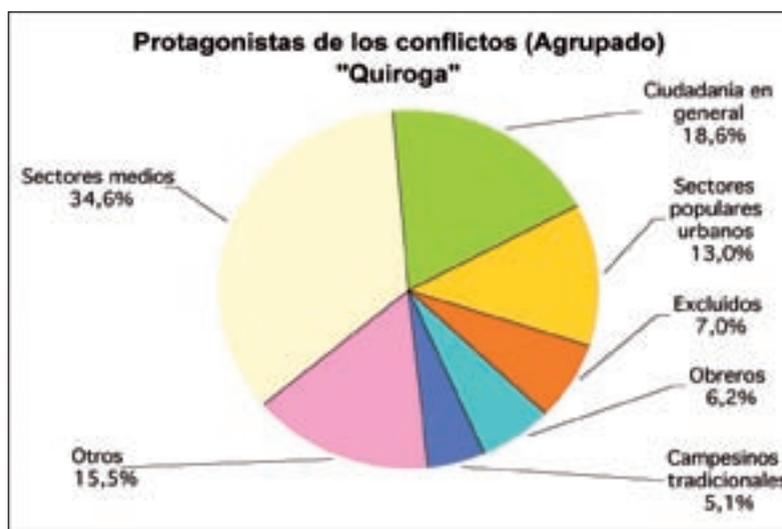


centros urbanos del país (66,8%) y en menor cuantía el área rural (25,9%); pero también se registraron casos que involucraron al país en su conjunto (4,8%) o a todo un departamento (2,5%).

Al departamento de Santa Cruz le corresponde el mayor porcentaje de conflictos (33%) registrados en el país, seguido de cerca por La Paz (30,4%) y algo más lejos por Cochabamba (23,7%). Los demás departamentos fueron escenarios poco frecuentes de los eventos conflictivos en Bolivia durante esta coyuntura (Ver Cuadro N° 12).

Los “sectores medios” lideraron la mayor parte de las acciones conflictivas (34,6%), especialmente los empleados públicos (9,9%), los pequeños comerciantes (6,2%), los estudiantes (5,6%) y los transportistas (4,5%) (Ver Gráfico N° 48 y Cuadro N° 14). En segundo lugar hallamos al sector denominado “ciudadanía en general”

Gráfico N° 48



(18,6%), y en seguida a los “sectores populares urbanos” (13%) que, en este caso, se halla constituido casi exclusivamente por grupos de vecinos o sus organizaciones (11,5%). También podemos mencionar de manera general la presencia de los “sectores excluidos” (7%), los obreros (6,2%) y los campesinos tradicionales (6,2%).

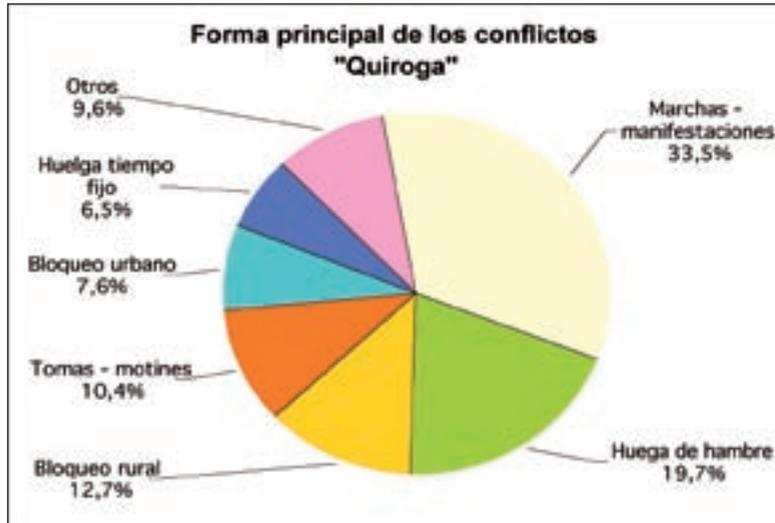
A lo largo de este régimen, el objetivo principal de los conflictos estuvo relacionado en la mayor parte de los casos con las “luchas económicas” (29,9%), sobre todo vinculadas a demandas de regiones o localidades específicas para contar con el apoyo del Estado en cuestiones de desarrollo económico (12,4%), así como por reclamos debido a sueldos atrasados (7,6%) (Ver Gráfico N° 49 y Cuadro N° 16). El segundo detonante más frecuente fue de orden “político coyuntural” (22,8%) y con mucha mayor intensidad que en periodos anteriores, orientado, en la mayor parte de los casos, a expresar rechazo al gobierno y sus políticas (13,2%) o para pedir el cambio de leyes y normas en el país (9,3%). También destacaron los conflictos en pos de un mayor “estatismo” (11,8%), es decir, solicitando la intervención del Estado sobre una empresa o institución. Finalmente, cabe destacar los eventos de tipo “político institucional” (11,3%), casi siempre para pedir el respeto y el cumplimiento de la normatividad legal, o de acuerdos y convenios por parte del Estado (8,5%).

Gráfico N° 49



Como se aprecia en el Gráfico N° 50, las formas más frecuentes que asumieron las acciones conflictivas fueron las marchas y manifestaciones (33,5%) y las huelgas de hambre (19,7%). En menor medida se produjeron bloqueos de vías en el área rural (12,7%), tomas de instituciones y motines (10,4%), bloqueos de vías en las áreas urbanas (7,6%), y huelgas laborales por tiempo definido (6,5%). Si agregamos los eventos de acuerdo al tipo de adhesión que éstos exigen de sus participantes, el Cuadro N° 18 nos señala que los de tipo “activo” representaron

Gráfico N° 50



el 83,9% del total, lo cual supone un notable incremento respecto del anterior periodo. No olvidemos que este tipo de conflictos suponen un mayor riesgo de violencia durante su desarrollo.

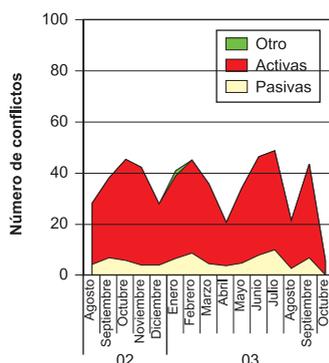
Por primera vez en los regímenes hasta ahora vistos, el Estado central fue definido como el "adversario" de los grupos en conflicto en menos de la mitad de todos los casos (47,6%), en contraste, las alcaldías lo fueron en mayor proporción que en periodos previos (17,2%). Otros destinatarios importantes de las demandas y reclamos de la población fueron las empresas estatales (11,8%), los aparatos del Estado a nivel local (7,9%), la Policía Nacional (5,6%) y la empresa privada (5,6%) (Ver Cuadro N° 19).

10. MNR - SÁNCHEZ DE LOZADA 2. (7 DE AGOSTO DE 2002 A 17 DE OCTUBRE DE 2003)

Durante su segundo mandato presidencial, Gonzalo Sánchez de Lozada trató de retomar el curso de las reformas estructurales y el modelo económico que había empezado a implementar durante su primera gestión. Sin embargo, el panorama social resultó ser muy diferente al que prevalecía durante aquella primera ocasión. Cabe mencionar, por ejemplo, que durante esta coyuntura creció el desencanto entre la población en torno al modelo neoliberal, sobre todo a partir de las críticas a la capitalización realizadas sistemáticamente, tanto desde el gobierno como desde las organizaciones sociales, durante los gobiernos de Bánzer y Quiroga. De esta manera, a pesar de que el país había multiplicado sus reservas de hidrocarburos y desarrollado un potencial significativo para situarse como un núcleo

Gráfico N° 51

Número de conflictos nuevos por mes “MNR - Sánchez de Lozada 2”



energético en el continente, se culpaba al presidente Sánchez de Lozada por la supuesta “pérdida” de nuestro recurso natural más importante, el gas, ante las transnacionales. Por otro lado, y a diferencia de su primera gestión, intelectuales independientes y militantes de la izquierda no fueron tomados en cuenta dentro del gobierno, por lo que debió abrirse incluso a los partidos que lo combatieron, como el MIR y NFR, a fin de tener una base parlamentaria sólida.

A lo expuesto debe sumarse la crisis económica y fiscal, agravada por un manejo inadecuado de la reforma de pensiones en el gobierno de Bánzer y la reducción de los sembradíos de coca en el Chapare. Un momento extremadamente crítico se produjo en febrero de 2003, cuando al presentarse el proyecto de Ley Financiera o Presupuesto General de la Nación, se propuso una nueva reforma tributaria que pretendía gravar en mayor proporción los ingresos más altos, lo que fue utilizado como pretexto para un levantamiento policial seguido de manifestaciones que derivaron en actos de vandalismo ante la ausencia de mecanismos de control social. La agitación social aumentó progresivamente, ocasionando, en octubre de 2003, la renuncia del Presidente. Los conflictos surgidos a raíz de estas tensiones sociales derivaron en enfrentamientos entre la población y la Policía e incluso con las Fuerzas Armadas, con el saldo de numerosos muertos y heridos.

En comparación con los periodos previos, durante el segundo y breve gobierno de Sánchez de Lozada el promedio de conflictos nuevos por mes se incrementó hasta alcanzar la cifra de 35,7 eventos (Ver Cuadro N° 10 y Gráficos N° 13 y 51). La mayoría de los eventos se desarrollaron en los principales centros urbanos del país (68,1%), en tanto que al área rural le correspondió un 23,6% de los casos; así mismo, los conflictos de alcance nacional representaron un 6% y los que afectaron a todo un departamento fueron el 2,3% sobre el total nacional (Ver Cuadro N° 11).

Como es habitual, la mayor parte de las acciones conflictivas tuvieron como escenario a los departamentos del Eje Central de Bolivia: Santa Cruz (28,4%), La Paz (27,4%) y Cochabamba (25,3%). Aunque en menor medida, también destacó la dupla Oruro-Potosí con el 7,3% de todos los casos (Ver Cuadro N° 12).

Una vez más, como se muestra en el Gráfico N° 52, los sectores medios lideraron la mayor parte de los conflictos en el país (40%), destacando entre ellos los empleados públicos (11,6%), los estudiantes (9,7%), los pequeños comerciantes (4,8%), los maestros urbanos (3,9%) y los trabajadores y docentes universitarios (3,7%) (Ver Cuadro N° 14). El gráfico también nos muestra que, durante este periodo, existió una alta dispersión de la acción conflictiva entre los diferentes grupos y sectores que conforman la sociedad boliviana, en este sentido, observamos que también protagonizaron conflictos, aunque en porcentaje más reducido, la "ciudadanía en general" (11,2%), los campesinos tradicionales (8,7%), los obreros (7,9%), los "sectores populares urbanos" (7,3%), los grupos de "excluidos" (6,6%) y los militantes de diferentes tiendas políticas (4,8%).

El objetivo más frecuente de los conflictos estuvo relacionado con temas económicos (27,8%), especialmente en lo referente a reclamos por sueldos atrasados (9,5%), pedidos por una mayor estabilidad laboral y fuentes de empleo (6,8%), apoyo por parte del Estado a regiones o localidades específicas en temas de desarrollo (6%) y mejoras en las condiciones de trabajo de las personas (4,8%) (Ver Gráfico N° 53 y Cuadro N° 16). Las demandas "político coyunturales" ocupan el segundo lugar en importancia (22,8%), ante todo con el objetivo de expresar el rechazo ciudadano al gobierno y sus políticas (16%) o para tratar de cambiar leyes y normas en el país (6,6%). Muy de cerca le siguen las denominadas "luchas so-

Gráfico N° 52



ciales" (18,9%), en este caso debidas mayormente a cuestiones de expropiación o apropiación de bienes, territorios, límites, etc. (10%), así como por demandas de parte de la población por una mayor participación en la designación, destitución o cambio de funcionarios públicos (8,3%). En menor grado aparecen demandas de tipo "estatista" (10,4%), "político institucional" (9,7%) o por "luchas organizativas" al interior de las organizaciones de la sociedad civil (5,2%).

Gráfico N° 53



De acuerdo al Gráfico N° 54, la mayor parte de los grupos en conflicto optaron por las marchas y manifestaciones como medidas de presión (29,9%). Y si bien las tomas u ocupaciones de instituciones y motines ocupan el segundo lugar en impor-

Gráfico N° 54



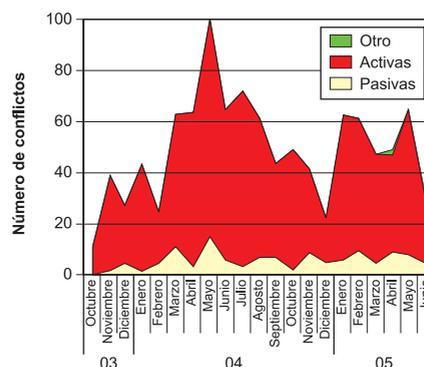
tancia (18,5%), estas son notablemente más frecuentes que en anteriores coyunturas. Le siguen las huelgas de hambre (18%), los bloqueos de vías en los centros urbanos (8,5%) y en el área rural (8,5%) y las huelgas laborales por tiempo definido (7,7%). Agregando estos eventos por el tipo de adhesión que exigen de sus participantes, tenemos que el 83,4% del total de casos fueron de tipo “activo”, que son los que conllevan un mayor riesgo de violencia durante su desarrollo (Ver Cuadro N° 18).

Los datos presentes en el Cuadro N° 19 señalan que el Estado a nivel central fue el destinatario de la mayor parte de los reclamos y demandas de los grupos en conflicto (47,9%). Y en menor proporción lo fueron las alcaldías (17,8%), las empresas estatales (13,7%), y los aparatos del estado a nivel local (8,7%).

11. CARLOS MESA. (18 DE OCTUBRE DE 2003 A 12 DE JUNIO DE 2005)

Al asumir la Presidencia, Carlos Mesa, hasta entonces Vicepresidente durante el gobierno de Sánchez de Lozada, conformó un gabinete integrado por profesionales independientes con poca o ninguna experiencia política, y se distanció deliberadamente del Congreso, de manera que no pudo contar con un apoyo ordenado de diputados y senadores. Sin embargo, algunas de las acciones más relevantes durante este periodo fueron las reformas constitucionales llevadas a cabo para poder convocar a una Asamblea Constituyente, y la realización de un referéndum en el que se consultó a la población sobre aspectos cruciales de la política de hidrocarburos. Esto no impidió que continuara la escalada de los conflictos sociales que involucraba a numerosos y muy heterogéneos grupos sociales. Las demandas por una nacionalización de los hidrocarburos, el tema de la tierra y reclamos por la implementación de autonomías regionales terminaron asfixiando al gobierno y debilitando su capacidad de gobernar. Ante

Gráfico N° 55
Número de conflictos nuevos por mes “Carlos Mesa”



la falta de apoyo, tanto de los sectores de izquierda como los de derecha y una nula representación parlamentaria, finalmente Mesa también renunció a la Presidencia.

Durante el gobierno de Carlos Mesa el promedio de conflictos nuevos por mes se incrementó notablemente respecto del anterior periodo (52,4 eventos), siendo el segundo más alto de los 13 períodos considerados en este informe (Ver Cuadro N°

Gráfico N° 56



10 y Gráficos N° 13 y 55). En relación al ámbito geográfico, la proporción de eventos que se desarrollaron en los principales centros urbanos del país fue casi la misma que en el régimen precedente (66,2%), en tanto que la de las áreas rurales es ligeramente más alta (29,4%). Por otra parte, las acciones conflictivas que involucraron a todo el país (3%) o a un departamento en su integridad (1,4%) representaron una pequeña proporción respecto al total nacional (Ver Cuadro N° 11).

Con no mucha diferencia porcentual entre ellos, fueron tres los departamentos donde se desarrollaron la mayor parte de los conflictos: Cochabamba (29,6%), La Paz (25,7%) y Santa Cruz (25,4%). Aunque también fue considerable la proporción de eventos que tuvieron por escenario Oruro-Potosí (7,2%) y Sucre-Tarija (5,5%) (Ver Cuadro N° 12).

En el Gráfico N° 56 se evidencia que los “sectores medios” protagonizaron la mayor parte de los conflictos durante esta coyuntura (28,3%), -aunque en mucha menor proporción que en las anteriores-, entre ellos destacaron los empleados públicos (7,8%), los transportistas (5,1%) y los estudiantes (4,5%) (Ver Cuadro N° 14). En el segundo lugar aparecen los campesinos tradicionales (14,9%), seguidos por los “sectores populares urbanos” (12,4%) que, en este caso, lo conformaron mayormente los grupos de vecinos o sus organizaciones (11,8%). Le sigue el grupo denominado “ciudadanía en general” (9,9%), que en casi la mitad de los casos fue liderado por las

organizaciones cívicas del país¹⁴. También cabe mencionar a los obreros (9,4%) y los sectores “excluidos” (6,5%). El relativamente elevado porcentaje correspondiente a la categoría “otros” indica que fueron muchos y heterogéneos los sectores de la sociedad civil que llevaron adelante acciones conflictivas durante este gobierno.

Los conflictos durante este periodo presidencial se debieron sobre todo a razones de tipo “político coyuntural” (34,2%), principalmente para expresar el

Gráfico N° 57



rechazo ciudadano al gobierno y sus políticas (15,1%) y para exigir cambios en las leyes y normas del país (18,7%) (Ver Gráfico N° 57 y Cuadro N° 16). Segundas en importancia fueron las demandas de tipo económico (21,1%), mayormente pidiendo que el gobierno apoye a una región o localidad específica en temas de desarrollo (7,7%) o demandando estabilidad laboral y fuentes de empleo (6%). Por otra parte, las “luchas sociales” (19,6%) se enfocaron principalmente en problemas de límites, territorios o expropiaciones y apropiaciones de bienes (10,3%), o pidiendo una mayor participación ciudadana en la designación, destitución o cambio de funcionarios públicos (8,1%). Así mismo, los objetivos de orden “político institucional” (9,3%) demandaron mayormente el respeto y cumplimiento de las leyes, normas y convenios vigentes en el país (8,5%). Por último, cabe mencionar los objetivos de tipo “estatista” (5,1%), que implican demandas para que el Estado intervenga o apoye a instituciones o empresas específicas.

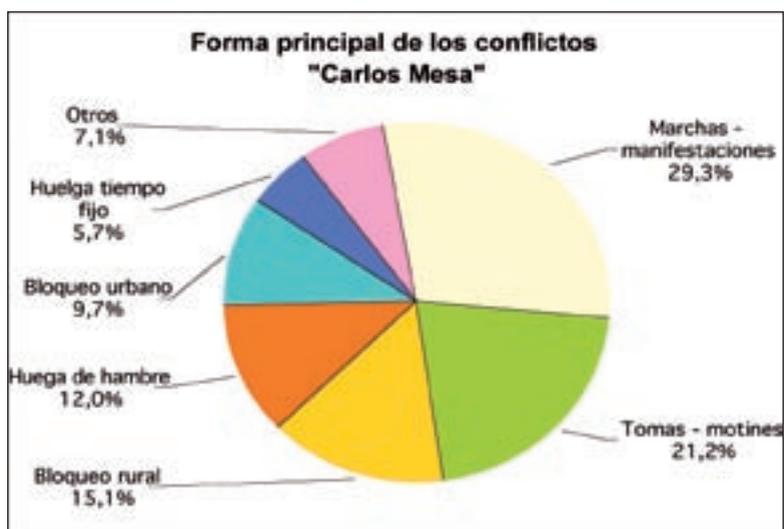
De acuerdo a los datos presentados en el Gráfico N° 58, casi tres de cada diez conflictos adoptaron la forma de marchas y manifestaciones, en tanto que las

¹⁴ A partir de este régimen presidencial se crea la categoría de “organizaciones cívicas” debido a su creciente liderazgo en la conducción de los conflictos sociales en el país.

tomas de instituciones y motines representan el 21,2% y los bloqueos de vías de comunicación en el área rural el 15,1% de todos los casos registrados. Aunque en menor proporción, también fueron empleados como mecanismos de presión las huelgas de hambre (12%), los bloqueos de vías de comunicación en áreas urbanas (9,7%) y las huelgas laborales por tiempo definido (5,7%). Si agregamos estos conflictos según el tipo de adhesión que requieren de sus participantes, los datos nos muestran que durante este periodo los de tipo "activo" tienen el porcentaje más alto (87,2%) de entre todos los considerados en este informe. Es importante recordar que esta clase de eventos conllevan un mayor riesgo de violencia a lo largo de su desarrollo (Ver Cuadro N° 18).

En casi seis de cada diez casos, los grupos que protagonizaron las acciones conflictivas exigieron que el Estado central atendiera sus demandas y reclamos. En menor medida, también se definieron como "adversarios" a las alcaldías (14,4%), los aparatos del Estado a nivel local (10,8%), y las empresas estatales (6,9%) (Ver Cuadro N° 19).

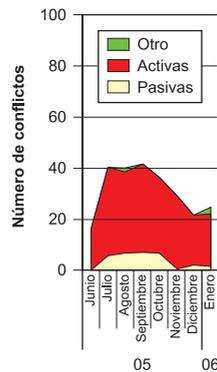
Gráfico N° 58



12. RODRÍGUEZ VELTZÉ (13 DE JUNIO DE 2005 A 22 DE ENERO DE 2006)

Durante la corta duración de su gobierno, que se le encomendó en su condición de Presidente de la Corte Suprema de Justicia y ante la renuncia concertada de los Presidentes del Senado y de Diputados, Eduardo Rodríguez Velzté tuvo como principal objetivo de sus acciones viabilizar un nuevo proceso electoral con la esperanza de superar, por este medio, la inestabilidad que aquejaba al país desde

Gráfico N° 59
Número de conflictos nuevos por mes “Rodríguez”



el año 2003. En relación a los programas de gobierno, se dio continuidad a lo que ya estaba establecido o en marcha desde gestiones anteriores, dándose prioridad a los gobiernos departamentales y municipales en la distribución de los nuevos impuestos a los hidrocarburos creados luego del referéndum.

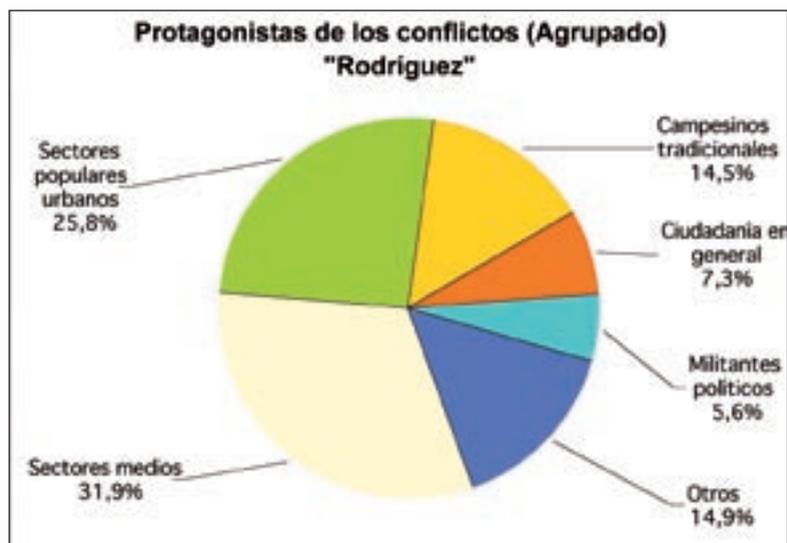
Durante este periodo, el promedio de conflictos nuevos por mes bajó considerablemente (34 eventos) (Ver Cuadro N° 10 y Gráficos N° 13 y 59). Por otro lado, la mayor parte de la acción social conflictiva se desarrolló en los principales centros urbanos del país (63,3%), y en menor medida en las áreas rurales (32,7%), en tanto que una pequeña proporción tuvo un alcance nacional (3,6%) (Ver Cuadro 11).

La mayor parte de los eventos tuvo por escenario a los departamentos de Cochabamba (39,1%), Santa Cruz (30,6%) y La Paz (14,9%), y en menor medida a Oruro-Potosí (4%), Sucre-Tarija (4%) y Beni-Pando (3,6%) (Ver Cuadro N° 12).

Los “sectores medios” protagonizaron la mayor parte de los conflictos durante esta coyuntura (31,9%), entre ellos destacan los empleados públicos (9,3%), los transportistas (6,9%), los pequeños comerciantes (5,6%) y los estudiantes (4,8%) (Ver Gráfico N° 60 y Cuadro N° 14). Segundos en importancia fueron los “sectores populares urbanos” (25,8%), conformados casi exclusivamente por grupos de vecinos o sus organizaciones. También fueron frecuentes las movilizaciones realizadas por “la ciudadanía en general” (7,3%) a través de las organizaciones cívicas del país. Finalmente, cabe mencionar los eventos llevados adelante por militantes de las diferentes agrupaciones políticas en Bolivia (5,6%).

Dos fueron los principales detonantes de los conflictos durante este periodo, el primero de ellos estuvo relacionado con temas de “política coyuntural” (27,4%), sobre todo para expresar rechazo al gobierno y sus políticas (13,3%), o demandando cambios en las leyes y normas del país (11,3%) (Ver Gráfico N° 61 y Cuadro N° 16). El segundo disparador más frecuente de acciones conflictivas estuvo vinculado a las “luchas económicas” (26,2%), muy especialmente pidiendo que el Estado apoye a una región o localidad dada en temas de desarrollo (14,1%) y luego

Gráfico N° 60



exigiendo mayor estabilidad laboral y la creación de fuentes de empleo (6,5%). También destacaron las demandas de corte “político institucional” (16,9%), casi todas ellas en pos de que se respeten y cumplan las leyes, normas y acuerdos vigentes en el país. Por otro lado, las denominadas “luchas sociales” (11,7%) se debieron en gran parte a disputas por límites, territorios o la expropiación o apropiación de bienes (8,1%). En menor proporción se dieron eventos conflictivos por demandas de un mayor “estatismo” (7,3%), o debido a “luchas organizativas” (4,4%).

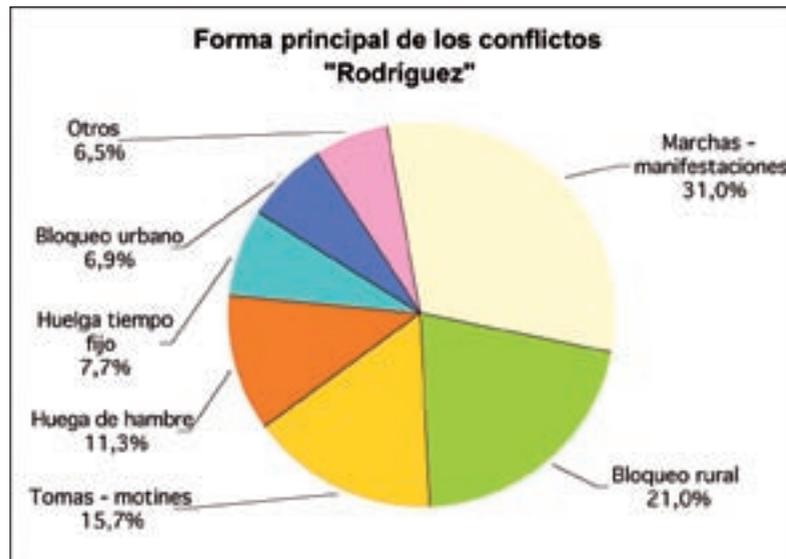
En el Gráfico N° 62 se pone de manifiesto que las marchas y manifestaciones fueron la forma que adoptaron la mayor parte (31%) de los conflictos durante esta coyuntura. Segundos en porcentaje fueron los bloqueos de vías en el área rural (21%), seguido por la toma de instituciones o motines (15,7%), las huelgas de hambre (11,3%), las huelgas laborales por tiempo definido (7,7%) y los bloqueos de vías en las áreas urbanas (6,9%). Agregando estos eventos de acuerdo al tipo de adhesión que requieren de sus participantes se evidencia que la mayoría fueron del tipo “activo” (85,9%), que son los que conllevan un mayor riesgo de violencia durante su desarrollo (Ver Cuadro N° 18).

El Estado a nivel central fue el principal adversario (38,3%) de los grupos en conflicto durante esta coyuntura, sin embargo, lo fue en una proporción menor a la del resto de los periodos considerados en este informe. En contraparte, se elevó considerablemente el porcentaje de casos en los que las demandas fueron planteadas ante las alcaldías (28,2%) o ante los aparatos del estado a nivel local (16,1%) (Ver Cuadro N° 19).

Gráfico N° 61



Gráfico N° 62

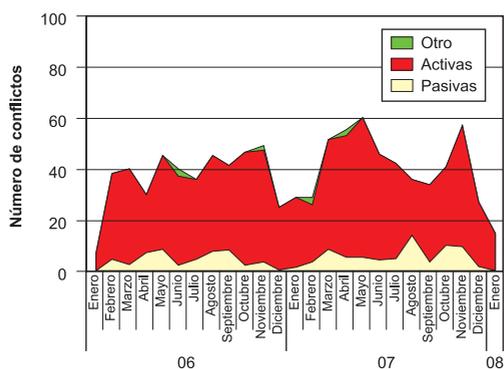


13. MAS - MORALES. (23 DE ENERO DE 2006 A 31 DE ENERO DE 2008)

Tras ganar las elecciones presidenciales con mayoría absoluta, el gobierno de Morales se dio a la tarea de implementar reformas en los contratos relativos a los hidrocarburos que el Estado mantenía con empresas extranjeras, así como a refundar o fortalecer las empresas estatales en sectores que sus ministros consideraban estratégicos. Sin embargo, la mayor parte de sus esfuerzos se orientaron a llevar adelante el

Gráfico N° 63

Número de conflictos nuevos por mes “MAS Morales”



proceso de la Asamblea Constituyente y, posteriormente, a tratar de lograr la aceptación ciudadana de la nueva Constitución Política del Estado surgida de aquélla.

Signada por una política de confrontación entre lo que este gobierno considera como representantes de la actual estructura de dominación, explotación y privilegios y los así llamados “movimientos sociales” y pueblos originarios, esta etapa se caracteriza por continuos enfrentamientos y manifestaciones de rechazo de gruesas capas de la población hacia las políticas, las transformaciones y los cambios propuestos o llevados adelante por el gobierno. El tema más sensible, y que mayores tensiones ocasiona, es el referente a las autonomías departamentales, sobre todo en aquellos departamentos en los cuales hubo un apoyo mayoritario, o importante, a esta reforma durante el referéndum que se convocó con esta finalidad y que se realizó simultáneamente a la elección de representantes a la Asamblea Constituyente. Las diferencias de experiencia y de criterio entre la población de los departamentos, fortalecidas con la elección de prefectos realizada en diciembre del 2005, y la reticencia del gobierno central ha ceder en su propósito de llevar a cabo una “revolución democrática y cultural” ha polarizado a la población induciendo una suerte de división territorial entre occidente y oriente, incluida en esta última Tarija, a la cual se adhieren, en menor medida Cochabamba y Chuquisaca.

Este periodo comprende los dos primeros años del régimen presidencial de Evo Morales, y se destaca por un notable incremento en el promedio de conflictos nuevos al mes (40,4 eventos), que es el tercero más elevado de entre las trece coyunturas consideradas en este informe (Ver Cuadro N° 10 y Gráficos N° 13 y 63). Por otro lado, también aumentó la proporción de conflictos que tienen por escenario los centros urbanos del país (72,4%), en tanto que al área rural le corresponde un 22% del total de casos registrados. También se incrementó la proporción de eventos que involucró a la totalidad de un departamento (2,6%) (Ver Cuadro N° 11).

Los datos señalan que la mayor parte de los eventos conflictivos tuvo por escenario el departamento de Cochabamba (32%), seguido de cerca por Santa Cruz

(29,8%) y algo más lejos La Paz (17,2%). Durante este periodo también destaca el departamento de Chuquisaca, donde se desarrolló el 5,9% de todos los casos registrados (Ver Cuadro N° 12).

Durante esta coyuntura, los “sectores medios” protagonizaron la mayor parte de los conflictos en el país (39,6%), sobre todo los empleados públicos (10,3%), los estudiantes (9%), los pequeños comerciantes (7,1%) y los transportistas (7%) (Ver Gráfico N° 64 y Cuadro N° 14). En segundo lugar destacaron los “sectores populares urbanos” (17,1%), constituidos casi exclusivamente por grupos de vecinos o sus organizaciones (16,2%). También fue importante la participación de la denominada “ciudadanía en general” (10,9%), principalmente a través de las diferentes organizaciones cívicas del país (10,5%) y, por último, cabe destacar la presencia de los campesinos tradicionales (10,5%). El elevado porcentaje correspondiente a la categoría “otros” (21,8%) hace referencia a que durante este periodo fueron numerosos y heterogéneos los actores y grupos sociales que lideraron conflictos pero en un porcentaje reducido respecto al total nacional.

Las demandas y reclamos en torno a temas de “política coyuntural” son las más frecuentes durante este régimen presidencial (47,7%) y detentan el porcentaje

Gráfico N° 64



más elevado respecto a los trece periodos estudiados, entre ellos, la mayor parte buscó expresar rechazo al gobierno y sus políticas (26,7%), o exigir el cambio de las normas y leyes del país (16,7%), pero también mostrar apoyo al gobierno y sus políticas (4,2%) (Ver Gráfico N° 65 y Cuadro N° 16). El segundo lugar en porcentaje corresponde a las “luchas económicas” (16,8%), principalmente demandando apoyo de parte del gobierno para regiones o localidades específicas en

temas de desarrollo (6,7%), o demandando mayor estabilidad y fuentes de empleo (3,8%). Por otro lado, las “luchas sociales” (13,3%) estuvieron mayormente referidas a demandas de la población por una mayor participación en la designación, destitución o cambio de funcionarios públicos (6,6%), o a conflictos por la expropiación o apropiación de bienes, territorios, límites, etc. (5,7%). Por último, destacan los conflictos surgidos en torno a objetivos “político institucionales” (9,6%) que, en este caso, se refirieron casi exclusivamente a reclamos para que se cumplan y respeten las leyes, normas o acuerdos vigentes en Bolivia (9,2%).

Como se aprecia en el Gráfico N° 66, una parte mayoritaria de los conflictos asumieron la forma de marchas y manifestaciones (34,6%), seguidas en importan-

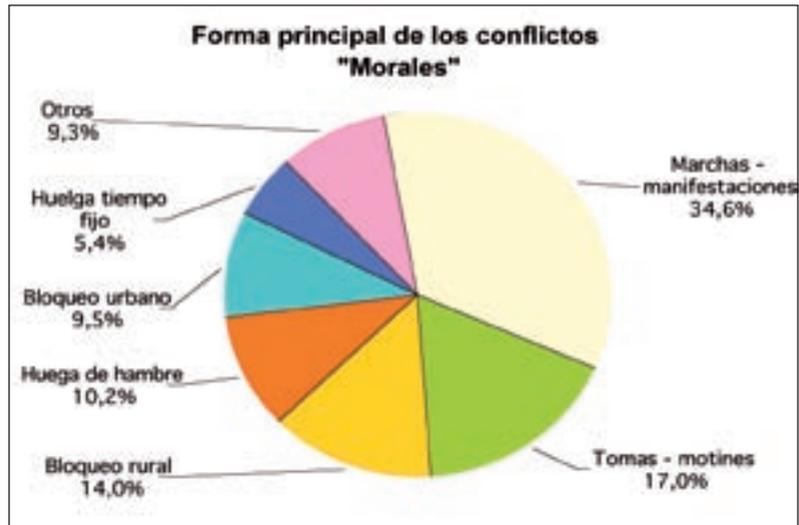
Gráfico N° 65



cia por la tomas de instituciones, motines o enfrentamientos violentos (17%), los bloqueos de vías en el área rural (14%), las huelgas de hambre (10,2%), los bloqueos de vías de comunicación en las áreas urbanas (9,5%) y las huelgas laborales por tiempo definido (5,4%). Si agregamos estos eventos según el tipo de adhesión que requieren de los participantes, obtenemos que el 85,3% corresponden al tipo “activo”, que son los que conllevan un mayor riesgo de violencia durante su desarrollo (Ver Cuadro N° 18).

Como es habitual, los grupos y sectores que protagonizaron acciones conflictivas hicieron blanco principal de sus demandas y reivindicaciones al Estado central (47,3%), y en menor grado a las alcaldías del país (24,6%), las empresas estatales (8,9%) y las reparticiones del Estado a nivel local (8,7%) (Ver Cuadro N° 19).

Gráfico N° 66



6

CONCLUSIONES

Una vez que se han considerado de manera general las principales características de los conflictos sociales en Bolivia durante los últimos 38 años, y de modo específico para cada uno de los trece regímenes presidenciales tomados en cuenta en este informe, se puede precisar algunos detalles concernientes a las tendencias observadas.

Ante todo, es evidente que los conflictos sociales están estrechamente relacionados con los diferentes momentos históricos del país. El tipo de gobierno y su forma de manejar los conflictos, el desempeño de la economía, las condiciones laborales, el debilitamiento o desaparición de algunos actores sociales y la aparición o fortalecimiento de otros afectan tanto al número de eventos, como a su intensidad y las consecuencias que de ellos se desprenden.

Los datos muestran que los 38 años considerados en este informe pueden dividirse en tres grandes etapas a partir de ciertas coincidencias o tendencias en las principales características de los conflictos sociales. La primera de ellas empieza en 1970 y se extiende hasta 1982 y corresponde al periodo de los gobiernos dictatoriales o militares en el país, salvo los interinatos constitucionales de Guevara Arze y Gueiler Tejada. La segunda etapa va desde 1982 al 2000 y se caracteriza por el retorno y la consolidación de la democracia, así como por profundos cambios estructurales e institucionales que marcan una etapa de estabilidad en Bolivia. La última etapa se extiende desde el año 2000 hasta el presente, y está signada por una profunda crisis del Estado y de la institucionalidad democrática, así como por fuertes luchas identitarias de corte indigenista o regionalista que cuestionan la actual estructura organizativa estatal en algunos casos, y la propia estructura social en otros.

Durante la primera etapa, el número de conflictos es comparativamente más bajo, y ello debido sin duda a las restricciones a las libertades civiles y democráticas impuestas durante esos años, pero también a la censura ejercida sobre los medios de comunicación, de tal suerte que probablemente se cuente con un reg-

istro de datos de los conflictos de esa época menor a los que hubo efectivamente. También durante esta etapa se observa una primacía de actores corporativos organizados en la acción social conflictiva, entre ellos destacan los empleados del sector público, los obreros, los estudiantes y los maestros, debido a ello, la forma de presión más recurrida por estos actores para la consecución de sus fines era la huelga laboral. Los principales causales de conflictos durante esta etapa estaban relacionados con aspectos salariales (aumentos, atrasos, etc.), pero también para exigir mayores libertades democráticas y el respeto a los Derechos Humanos.

Los primeros años de la segunda etapa trajeron consigo un aumento drástico del número de los conflictos sociales, ello debido principalmente a la severa crisis económica y a las contradicciones y pugnas entre los socios de la coalición gobernante. Gobiernos posteriores lograron estabilizar los principales indicadores macroeconómicos mediante políticas de ajuste estructural de corte liberal, lo cual a su vez produjo en la población un sentimiento de seguridad y bienestar relativos y, por tanto, el número de eventos conflictivos disminuyó progresivamente hasta alcanzar sus niveles más bajos en el período de 38 años que considera este informe. Por otro lado, medidas como la capitalización de empresas públicas, el quiebre o cierre de otras, así como la liberalización de las leyes laborales tuvieron como consecuencia una disminución de la masa laboral sindicalizada en el país y, por tanto, de sus métodos de lucha tradicionales: las huelgas laborales. Una parte importante de la fuerza laboral fue absorbida por el denominado “sector informal” de la economía, al mismo tiempo que hacían su aparición nuevos actores sociales o se tornaban más visibles otros ya existentes como los desempleados, los jubilados, los marginados, etc. Al no poder recurrir a las huelgas laborales como método de protesta y presión, estos actores empezaron a buscar métodos alternativos para la visibilización de sus demandas y reclamos, y para ello emplearon principalmente las marchas y manifestaciones, pero también las huelgas de hambre, los bloqueos, los enfrentamientos violentos y tomas de instituciones, etc. A lo largo de esta etapa las reivindicaciones de tipo económico siguen siendo las más importantes aunque tienden a disminuir paulatinamente, en contraste, fueron ganando fuerza los reclamos de índole “político coyuntural”, es decir, en reacción o protesta contra los gobiernos y las acciones o medidas tomadas por ellos.

Durante la tercera etapa se vive en primera instancia una especie de desencanto con el modelo económico vigente, que posteriormente se agudizaría con una crisis y falta de legitimidad del Estado y de toda la institucionalidad democrática; algunos sectores objetarían inclusive lo que denominan el modelo civilizatorio occidental. La principal repercusión de este hecho reside en que la gran mayoría de los conflictos son de corte coyuntural, sobre todo a fin de rechazar las políticas, planes y acciones del gobierno. Este hecho, sumado a la débil legitimidad, la ineficacia o la inexistencia de mecanismos institucionales para la resolución

de conflictos deviene en un nuevo y progresivo aumento del número de acciones sociales conflictivas en el país, y que además son cada vez más violentas o representan un mayor riesgo tanto para la población como para quienes están envueltos en ellas. Por supuesto, ha tenido influencia en estas tendencias la reticencia de los presidentes Bánzer, Mesa y Morales a utilizar a las fuerzas policiales y militares para restablecer el orden, incluso cuando las acciones conflictivas transgredieron normas básicas y afectaron los derechos y las libertades de otros ciudadanos.

Si bien las clases medias son el principal protagonista de los eventos conflictivos en el país, lo son en una proporción cada vez menor, en contraste, un creciente porcentaje de los conflictos son liderados por grupos cada vez más diversos de actores sociales y entre los cuales no destaca de manera absoluta uno o unos cuantos como en el pasado. Por otra parte, y a medida que los temas regionales e indígenas van cobrando fuerza, también se observa una fuerte participación de la ciudadanía en general, es decir, en formas no corporativas, en el ámbito de los conflictos sociales, y ello ocurre cada vez menos frecuentemente debido a convocatorias de los Comités Cívicos, sino más bien a partir de llamamientos de numerosas y nuevas organizaciones de corte cívico-ciudadano que han aparecido en diferentes regiones del país.

Durante los 38 años considerados en este informe, el Estado, sobre todo a nivel central, ha sido el principal destinatario de las demandas, reclamos y protestas de la población. Sin embargo, y a partir de la Ley de Participación Popular, las diferentes alcaldías del país han cobrado mayor relevancia.

Para finalizar, se puede señalar que a lo largo de las tres etapas mencionadas, y de manera general, se evidencia un desplazamiento del centro gravitatorio de los conflictos desde la ciudad de La Paz hacia Cochabamba y Santa Cruz. Aunque en los últimos tiempos, y sobre todo a partir de la instauración de la Asamblea Constituyente, una proporción cada vez mayor de eventos tienen por escenario a los departamentos de Chuquisaca y Tarija.



ANEXO 1

VARIABLES Y CATEGORÍAS UTILIZADAS

1 PERIODO PRESIDENCIAL

En casi todos los casos se corresponde con los periodos gubernamentales que se han sucedido en el país. Antes del gobierno de Hernán Siles-UDP, la mayor parte de estos periodos tuvieron un carácter de facto y autoritario y en medio se dieron algunos intentos fallidos de democratización o de transición a la democracia poco antes de 1982, además, algunos de ellos tuvieron una corta duración temporal. Debido a estas razones, y a manera de facilitar la lectura de los datos, se han agrupado algunos de estos regímenes en razón a que comparten ciertas características comunes, tales como su fugacidad u otras características comunes.

2 ÁMBITO GEOGRÁFICO

Hace referencia, de manera general, a si los conflictos se desarrollaron en las áreas urbanas o rurales de Bolivia, o si, además, si estas tuvieron un alcance departamental o nacional.

3 DEPARTAMENTO

Especifica en qué departamento ocurrió el evento o si involucró a todo a todo el país, o a una región específica: Bloque Sur, Eje Central (La Paz-Cbba.-Santa Cruz). A excepción del gobierno de Evo Morales, la Base de Datos agrupa algunos departamentos por pares debido a los pocos conflictos registrados en ellos por los medios de prensa utilizados como referencia. Desde el periodo mencionado, y debido a un mayor registro de eventos en tales departamentos, cada unos de éstos se muestra individualizado.

4 PROTAGONISTAS

Dentro del proceso de lucha, enfrentamiento o negociación de un conflicto, constituye la cabeza visible del grupo o los grupos sociales que han hecho estallar el conflicto y, por lo tanto, son sus líderes y representantes legítimos en las diversas etapas de éste. Si bien por lo general el grupo social líder es a la vez el grupo directamente involucrado en el conflicto, ocasionalmente estos últimos ceden las funciones de liderazgo y representación (como una estrategia para aumentar su poder de negociación) a entes superiores o más organizados. Tal puede ser el caso de un sindicato que, en el país, podría recurrir al apoyo de la COD, COB, Derechos Humanos, y otros, quienes no solamente asumen como suyas las reivindicaciones o demandas de sus “protegidos”, sino que pueden terminar liderando todo el proceso.

Los datos pertinentes a esta variable se presentan de dos maneras: desagrupados y agrupados. Esta agregación se detalla en el Anexo 2.

5 OBJETIVO PRINCIPAL

Esta variable recoge aquellas reivindicaciones, demandas o reclamos perseguidos por los diferentes actores sociales durante el desarrollo de un evento conflictivo. En todos los casos, se hace referencia únicamente a las intenciones explicitadas o declaradas públicamente por aquellos quienes lideran los conflictos.

Los datos pertinentes a esta variable se presentan de dos maneras: desagrupados y agrupados. Esta agregación se detalla en el Anexo 2.

6 FORMA O MANIFESTACIÓN DOMINANTE

La forma de un conflicto está dada por los métodos o instrumentos que utilizan los diferentes actores durante el desarrollo de éste. Muchas veces se trata de medidas de presión para lograr que se atiendan o resuelvan los problemas que desencadenaron el conflicto y, por ello, las formas que adopta un conflicto (actos de presión) pueden ser más de una o también pueden cambiar en el tiempo. Algo similar ocurre cuando se realizan eventos conflictivos para expresar opiniones, propuestas o necesidades. Sin embargo, casi siempre es posible destacar un método principal de acuerdo a la intensidad, nivel de adhesión o tiempo durante el cual fue utilizado. Esta forma predominante del conflicto ha sido registrada como “manifestación dominante”, en tanto que “manifestación secundaria” recoge acciones no tan importantes o subordinadas a la primera.

Sin embargo, estas manifestaciones también pueden agruparse de acuerdo al tipo de adhesión que requieren del actor, la cual puede ser pasiva o activa. Por ad-

hesión pasiva entendemos aquellas manifestaciones en las cuales los participantes simplemente dejan de hacer lo habitual. La adhesión activa, por el contrario, requiere que los participantes realicen algo no habitual. Esta clasificación es de gran importancia, ya que los conflictos catalogados como de “adhesión activa” son los que pueden ocasionar un mayor grado de violencia, ya sea por parte de quienes protagonizan los mismos, o por parte de quienes les hacen frente (otros grupos o actores, la policía, etc.).

7 ADVERSARIO

Este actor, por lo general, es constituido a partir del momento en que el grupo social líder o los grupos que hacen estallar un conflicto identifican un antagonista o “enemigo”, o intentan definirlo como interlocutor u oponente. Desde el momento en que su constitución como actor no depende de sí mismo sino que le es impuesta, esto implica que, algunas veces, el adversario no se sienta interpelado a asumir este rol ni a tomar parte activa en el desarrollo del conflicto.



ANEXO 2

VARIABLES AGRUPADAS O RECATEGORIZADAS

La siguiente lista indica qué variables conforman las así llamadas “variables agrupadas”.

GRUPO SOCIAL LÍDER AGRUPADO

0 Sin información

0 Sin información

1 Obreros

- 1 Obreros mineros
- 2 Obreros fabriles
- 3 Obreros de la construcción (SNC)
- 4 Otros obreros (SEMAPA, YPFB, FFCC)
- 25 COB
- 26 COD - COR

2 Campesinos tradicionales (altiplano, valles, serranías y oriente)

5 Campesinos tradicionales

3 Campesinos cocaleros

6 Campesinos cocaleros

4 Sectores populares urbanos

- 7 Pobladores urbanos - vecinos, Comité de Vigilancia
- 8 Amas de casa (barrios periféricos, esposas de mineros)
- 9 Artesanos y otros productores no asalariados

5 Sectores medios

- 10 Magisterio rural
- 11 Magisterio urbano
- 12 Bancarios
- 13 Estudiantes (secundaria-universitarios-normales)
- 14 Profesionales independientes (pilotos del LAB)
- 15 Empleados públicos (Caja Petrolera, AASANA)
- 16 Trabajadores-docentes universitarios
- 17 Empleados del sector privado
- 18 Pequeños comerciantes
- 19 Transportistas

6 Militantes políticos

- 20 Militantes políticos

7 Ciudadanía en general

- 21 Ciudadanía en general
- 28 Comité Cívico y otras organizaciones cívicas

8 Excluidos

- 22 Trabajadores despedidos-desempleados-relocalizados
- 23 Excombatientes-jubilados-rentistas-sandwich

9 Otros

- 24 Otros

10 Otros

- 27 Indígenas / originarios

OBJETIVO PRINCIPAL AGRUPADO

0 Sin información - No especificado

- 0 Sin información

1 Político Institucional

- 1 Libertades democráticas (pensamiento, acción, comunicaciones, asociación, sindicales, libertad de detenidos en luchas sociales, etc.)
- 2 Defensa derechos humanos
- 3 Vigencia de leyes, normas, reglamentos, acuerdos, convenios

2 Luchas Sociales

- 4 Participación (en designaciones, destituciones, cambios de funcionarios o actividades)
- 5 Participación en gestión de empresas, toma de decisiones, manejo o control de proyectos, etc.
- 6 Expropiación-apropiación de bienes, terrenos, territorio, límites

3 Política Coyuntural

- 7 Cambiar disposiciones legales
- 8 Apoyo al gobierno
- 9 Rechazo o cambio de gobierno, prefectura o alcaldía, o a sus medidas, planes, políticas, acciones, leyes, etc.

4 Luchas Económicas

- 10 Apoyo estatal a la zona - Obras de desarrollo en una localidad, ciudad o región - infraestructura, áreas verdes
- 11 Mejores condiciones de consumo - costo de vida - condiciones del mercado
- 12 Mejores condiciones de trabajo - equipos de seguridad - jornada laboral
- 13 Aumento de sueldos o salarios, bonos, beneficios sociales
- 14 Pago de sueldos atrasados - reintegros, beneficios sociales
- 15 Estabilidad laboral - reposición, creación de nuevos trabajos

5 Luchas Organizativas

- 16 Conflicto intra-organización
- 17 Solidaridad (intra-inter sectorial)

6 Estatismo

- 18 Apoyo estatal a empresa o institución, desembolsos, fondos, gremio, sector

7 Otros

- 19 Otros

FORMA DE ADHESIÓN A LOS CONFLICTOS AGRUPADO

1 Conflictos de adhesión PASIVA

- 1 Paro cívico
- 2 Huelga laboral, plazo fijo (24,48 horas, etc.)
- 3 Huelga laboral indefinida
- 9 Huelga de brazos caídos (huelga con ocupación)
- 10 Estado de emergencia

2 Conflictos de adhesión ACTIVA

- 4 Huelga de hambre
- 5 Bloqueo de vías urbanas
- 6 Bloqueo de vías rurales
- 7 Marchas - Manifestaciones - Mitines - Cabildos - Crucifixión
- 8 Tomas - Ocupaciones - Intervenciones - Control sedes - Amotinamiento - Enfrentamientos



ANEXO 3

Cuadro N° 1
Ámbito geográfico por año

	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	0	1	2	3	4	5	6	7	8	Total
1 Urbano	290	278	75	101	149	191	103	63	220	201	170	42	372	415	507	317	190	203	160	107	161	166	114	83	92	96	37	37	217	273	260	223	276	271	433	364	310	399	3	1946
2 Rural	65	79	24	37	40	29	28	10	38	26	13	56	53	52	69	41	33	29	38	47	34	16	17	14	18	15	47	67	91	76	98	105	114	136	121	94	6	2100		
3 Departamental	9	6	1	5	4	2	9	2	11	8	2	7	17	8	76	60	56	51	37	28	38	46	42	34	23	27	33	28	19	20	16	21	7	10	9	6	23	2	714	
4 Nacional	23	17	6	4	5	1	1	11	33	25	2	65	78	92	95	49	39	41	38	54	22	27	27	25	19	30	35	31	28	16	20	28	18	17	17	17	17	17	1053	
Total	396	380	106	147	198	90	141	76	277	280	223	59	513	553	777	511	336	342	266	205	274	304	212	160	152	136	178	136	313	368	397	335	401	414	654	535	471	527	15	11893

Cuadro N° 2

Departamento por Año	Año																																						Total	
1 La Paz	128	96	36	38	40	13	45	29	82	74	60	18	179	95	230	521	608	81	52	33	53	40	42	23	18	27	37	33	56	68	94	97	112	118	174	105	70	97	3	2850
2 Cochabamba	71	72	20	26	61	28	27	13	56	77	41	11	89	177	150	110	77	74	70	55	48	46	45	14	32	44	35	35	69	74	79	64	104	97	193	187	161	155	5	2802
3 Santa Cruz	66	82	23	22	22	5	22	14	49	30	61	11	41	34	122	91	38	42	34	23	59	59	38	42	41	36	133	102	117	129	109	168	142	149	145	5	2407			
4 Oruro-Potosí	83	80	13	30	36	31	34	6	53	47	26	12	73	56	106	74	63	53	57	36	49	53	35	28	12	15	13	19	23	47	47	20	18	33	44	37	11	1478		
5 Sucre-Tarija	29	27	4	6	23	6	9	7	12	7	4	2	26	20	49	31	27	20	11	9	16	26	14	9	12	10	12	17	22	36	14	10	14	32	32	6	617			
6 Beni-Pando	5	5	4	1	7	2	4	8	8	4	1	19	17	15	12	13	14	5	6	11	26	16	8	6	5	9	5	7	13	9	6	14	21	14	4	6	337			
7 Potosí	23	17	6	4	5	1	1	11	33	25	2	65	79	92	95	49	36	41	38	54	22	27	25	19	30	18	31	28	30	16	20	18	17	17	12	14	1053			
8 Bloque Sur	1	1																																				14		
9 Eje central																																							59	
10 Oruro																																							19	
11 Potosí																																							11	
12 Chuquisaca																																								13
13 Tarija																																								6
14 Beni																																								4
15 Pando																																								2
Total	396	380	106	147	198	90	141	76	277	280	223	59	513	553	777	511	336	342	266	205	274	304	212	160	152	136	178	136	313	368	397	335	401	414	654	535	471	527	15	11893

Cuadro N° 3

Grupo líder reconfigurado por Año	Año																																						Total	
8 Sin información	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	0	1	2	3	4	5	6	7	8	Total
1 Obreros	61	69	18	40	35	36	33	9	36	72	28	30	123	106	196	159	83	85	82	42	58	65	48	38	36	29	54	37	40	43	26	28	30	28	61	46	21	14	1986	
2 Campesinos tradicionales	20	33	11	2	5	1	4	3	7	12	1	15	22	18	18	9	3	3	6	1	2	4	7	1	54	53	31	16	30	42	87	95	90	45	64	6	270	648		
3 Campesinos cocaleros	2	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	270	
4 Sectores populares urbanos	7	10	3	5	6	1	2	2	8	11	7	2	12	20	17	29	7	6	4	5	6	4	5	6	2	2	4	5	18	28	28	35	47	24	87	94	97	76	4	706
5 Sectores medios	237	192	56	85	122	45	64	54	165	152	145	116	288	347	436	248	194	144	136	112	160	165	89	79	69	68	56	42	118	169	163	108	164	151	198	148	172	172	5	5617
6 Militantes políticos	7	10	5	2	1	1	1	2	3	2	3	2	7	9	11	10	2	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21
7 Ciudadanos en general	28	17	5	3	9	3	9	6	17	17	14	1	56	20	31	13	29	20	13	17	23	27	17	17	19	25	22	34	54	64	72	45	62	50	50	33	73	1	1000	
8 Excluidos	15	21	1	3	9	2	1	7	6	3	1	24	9	5	54	29	21	13	12	9	7	5	12	5	18	28	24	22	30	51	16	11	6	11	6	11	6	475		
9 Otros	13	19	6	6	11	1	6	3	13	12	13	6	27	18	15	18	21	13	4	9	11	21	22	14	17	20	15	15	52	59	40	34	38	42	62	42	35	17	2	838
10 Indígenas-originarios																																								76
Total	396	380	106	147	198	90	141	76	277	280	223	59	513	553	777	511	336	342	266	205	274	304	212	160	152	136	178	136	313	368	397	335	401	414	654	535	471	527	15	11893

Cuadro N° 9
Adversario por Año

	Año																												Total												
	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97		98	99	0	1	2	3	4	5	6	7	8	
8 Sin información	0	3	3	7	4	1	7	7	7	4	4	11	6	4	4	3	2	14	1	1	3	1	3	5	3	5	3	1	3	5	1	4	3	8	2	6	3	2	137		
1 Estado central	247	162	59	84	112	49	89	33	51	564	114	24	337	263	471	281	262	254	203	127	172	181	143	114	115	130	143	150	183	206	212	181	179	215	367	293	195	258	7	7021	
2 Policía y FF.AA.	4	12	2	2	3	2	4	6	3	2	1	7	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	130	
3 Estado local	45	53	21	22	51	20	13	24	30	29	41	6	58	65	595	90	18	27	17	18	32	31	35	12	22	8	14	28	42	33	29	20	33	38	83	60	45	40	1	1369	
4 Empresas del Estado	23	31	1	21	11	8	6	4	20	16	10	7	27	31	83	68	24	45	33	47	67	59	19	21	9	9	13	8	33	51	44	41	59	49	47	31	38	48	1	1154	
5 Empresa privada	30	32	2	3	5	12	11	6	20	20	12	9	24	25	90	59	9	6	2	10	12	3	4	3	2	3	3	13	24	29	17	20	12	12	9	12	14	2	565		
6 Comerciantes	1																																							8	
7 Transportistas	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	64		
8 Otro	31	66	17	7	13	5	12	5	12	47	38	2	45	49	40	21	8	5	3	9	3	5	11	8	1	2	4	4	56	17	19	13	12	22	26	33	37	19	686		
9 Alcaldía																																									769
Total	396	380	1106	147	198	160	141	176	277	280	223	59	532	551	777	511	336	342	266	205	274	304	212	160	152	156	178	136	313	389	397	335	401	414	654	535	471	1507	15	11893	



ANEXO 4

Cuadro N° 11
Lugar reconfigurado por Periodo presidencial

	Periodo presidencial										Total		
	Ovando-Tórrez (1 y 2)	Báñez (1 y 2)	Pereda-G. Mesa	Siles	V. Paz	J. Paz	G. Sánchez 1	Báñez (3)	Quiroga	G. Sánchez 2		C. Mesa	Rodríguez
Urbano	545	710	811	1.255	659	533	352	942	237	353	690	157	702
Rural	136	187	143	219	150	142	62	247	92	122	306	81	213
Departamental	14	32	30	127	185	145	127	72	9	12	15	1	25
Nacional	39	23	123	224	186	148	90	103	17	31	31	9	29
Total	734	952	1.107	1.825	1.180	968	631	1.364	355	518	1.042	248	969

Cuadro N° 12
Departamento por Periodo presidencial

	Periodo presidencial										Total		
	Ovando-Tórrez (1 y 2)	Báñez (1 y 2)	Pereda-G. Mesa	Siles	V. Paz	J. Paz	G. Sánchez 1	Báñez (3)	Quiroga	G. Sánchez 2		C. Mesa	Rodríguez
La Paz	215	279	330	538	240	180	111	295	108	142	268	37	167
Cochabamba	130	219	244	420	279	170	137	273	84	131	308	97	310
Santa Cruz	131	144	150	240	150	193	170	425	117	147	265	76	289
Oruro-Potosí	154	189	176	231	211	169	61	139	14	38	75	10	11
Sucre-Tarija	53	65	39	100	69	67	38	87	9	17	57	10	6
Beni-Pando	10	26	28	52	40	61	23	37	5	9	33	9	4
Pais	39	23	123	224	186	148	90	103	17	31	31	9	29
Bloque Sur	2	1	1	2	5			1		2			
Eje central	6	6	16	18			1	4	1	1	5		7
Oruro													19
Potosí													22
Chuquisaca													57
Tarija													26
Beni													15
Pando													7
Total	734	952	1.107	1.825	1.180	968	631	1.364	355	518	1.042	248	969

Cuadro N° 13
Grupo líder reconfigurado por Periodo presidencial

	Periodo presidencial										Total		
	Ovando-Tórrez (1 y 2)	Báñez (1 y 2)	Pereda-G. Mesa	Siles	V. Paz	J. Paz	G. Sánchez 1	Báñez (3)	Quiroga	G. Sánchez 2		C. Mesa	Rodríguez
Sin información	2			10		4					4		
Obreros	126	197	272	398	277	210	159	143	22	41	98	10	35
Campesinos tradicionales	54	30	26	60	20	20	14	68	18	45	155	36	102
Campesinos coccaleros	11	3	1	23	33	13	31	41	10	20	23	1	10
Sectores populares urbanos	17	21	36	122	21	22	11	102	46	38	129	64	166
Sectores medios	410	567	612	1.044	604	506	245	536	123	207	295	79	384
Militantes políticos	11	19	14	30	7	4	4	17	5	25	31	14	40
Ciudadanía en general	45	43	55	61	95	82	76	192	66	58	103	18	106
Excluidos	35	23	29	25	77	38	30	70	25	34	68	4	17
Otros	25	47	62	52	46	69	61	185	37	46	100	15	93
Indígenas-originarios								10	3	4	36	7	16
Total	734	952	1.107	1.825	1.180	968	631	1.364	355	518	1.042	248	969

Cuadro N° 14
Grupo Social Líder por Periodo presidencial

	Periodo presidencial										Total			
	Ovando-Torrez (1 y 2)	Bánzer (1 y 2)	Pareda-G. Mesa	Siles	V. Paz	J. Paz	G. Sánchez 1	Bánzer (3)	Quiroga	G. Sánchez 2		C. Mesa	Rodríguez	Morales
Sin información		2		10		4								20
Miembros	37	95	83	98	83	63	13	12	4	13	31		17	549
Fabril	40	83	100	107	28	23	13	10	5	4	6	2	1	422
Obreros construcción	3	7	19	53	15	9	11	17		1			1	136
Otros obreros	22	10	19	49	42	27	18	15	2	1	11	7	1	224
Campesinos tradicionales	54	30	26	60	20	20	14	68	18	45	155	36	102	648
Campesinos cocaleros	11	3	1	23	33	13	31	41	10	20	23	1	10	220
Vecinos urbanos	15	14	25	87	9	15	7	90	4	35	123	63	157	681
Amas de casa - esposas	1	7	9	26	10	6		4	4		2		1	70
Artesanos - no asalariados	1		2	9	2	1	4	8	1	3	4	1	8	44
Magisterio rural	6	10	17	18	44	44	21	14	1	4	15	1	6	201
Magisterio urbano	42	64	86	106	97	69	35	56	8	20	28	1	27	639
Bancarios	9	51	78	103	8	10				1				260
Estudiantes	190	266	96	110	77	48	36	87	20	50	47	12	87	1.126
Profesionales	5	4	29	60	21	31	15	19	8	2	2		7	203
Empleados públicos	89	62	191	512	183	67	169	35	35	60	81	23	100	1.755
Trabajadores-docentes Universidad	8	40	36	30	111	75	35	55	6	19	19	10	13	457
Empleados privados	30	32	40	52	42	9	8	40	7	13	14	1	7	295
Pequeños comerciantes	4	8	7	9	12	17	18	52	22	25	36	14	69	203
Transportistas	27	30	32	44	9	20	10	44	16	13	53	17	68	383
Militantes políticos	11	19	14	30	7	4	4	17	5	25	31	14	40	221
Ciudadanía en general	45	43	55	61	95	82	76	152	66	58	52	1	4	830
Despedidos-desempleados	22	10	22	18	52	18	13	47	17	20	41	2	8	290
Excombatientes-jubilados-rentistas	13	13	7	7	25	20	17	23	8	14	27	2	9	185
Otros	23	47	62	52	46	69	61	185	37	46	100	15	93	838
COB	7		17	25	60	54	70	47	5	11	24	3	323	
COD	17	2	34	66	49	34	34	42	6	11	26	1	12	334
Indígenas - originarios								10	3	4	36	7	16	76
Org cívicas								51	17	102	51	17	102	170
Total	734	952	1.107	1.825	1.180	968	631	1.364	355	518	1.042	248	969	11.893

Cuadro N° 15
Objetivo principal recodificado por Periodo presidencial

	Periodo presidencial										Total			
	Ovando-Torrez (1 y 2)	Bánzer (1 y 2)	Pareda-G. Mesa	Siles	V. Paz	J. Paz	G. Sánchez 1	Bánzer (3)	Quiroga	G. Sánchez 2		C. Mesa	Rodríguez	Morales
Sin información		9	3	6	1	1		1			4			29
Político institucional	141	238	149	163	53	85	48	167	40	50	97	42	93	1.366
Luchas sociales	120	61	82	200	70	80	30	162	64	98	204	29	129	1.329
Político comunitario	101	151	120	215	188	213	253	342	81	118	356	68	462	2.668
Luchas económicas	305	366	641	1.027	540	424	181	488	106	144	220	65	163	4.668
Luchas organizativas	28	66	52	104	135	53	42	65	11	27	42	11	42	698
Estadismo	3		11	69	148	79	58	107	42	54	53	18	35	677
Otro	31	41	49	41	45	34	19	34	11	27	66	15	45	458
Total	734	952	1.107	1.825	1.180	968	631	1.364	355	518	1.042	248	969	11.893

Cuadro N° 16
Objetivo Principal por Período presidencial

	Período presidencial										Total		
	Ovando-Tórrez (1 y 2)	Báñez (1 y 2)	Pereda-G. Mesa	Siles	V. Paz	J. Paz	G. Sánchez 1	Báñez (3)	Quiroga	G. Sánchez 2		C. Mesa	Rodríguez
Sin información	5	9	3	6	1	1	15	31	5	11	4		29
Libertades	44	129	69	46	19	22	15	31	5	11	2		3
DDHH - jurídico	59	70	46	38	16	13	5	31	5	12	6	1	303
Vigencia leyes	38	39	34	79	18	38	28	105	30	27	89	41	667
Participación designaciones	63	55	77	161	55	56	21	72	20	43	84	9	64
Participación gestión	20	4	4	28	6	13	7	22	4	3	13		10
Expropiación, límites, territorio	37	2	1	11	9	11	2	68	40	52	107	20	55
Cambiar leyes-normas	63	119	92	202	54	70	57	122	33	34	195	28	162
Apoyo gobierno	23	27	6	9	2	2			1	1	4	7	41
Rechazo gobierno	15	5	22	4	132	141	196	220	47	83	157	33	259
Apoyo zona	62	41	53	78	79	65	65	141	44	31	80	35	65
Condiciones consumo	10	46	83	126	4	8	5	71	10	1	10	6	13
Condiciones trabajo	56	66	104	113	6	6	2	11	3	3	5	3	398
Aumentos	46	52	186	401	225	118	56	67	14	25	31	3	23
Atrasos	102	112	160	254	180	163	46	129	27	49	31	5	22
Estabilidad laboral	29	29	55	55	46	64	35	67	8	35	63	16	37
Conflicto intra-organización	24	17	14	32	13	27	19	48	7	22	24	6	29
Solidaridad	4	69	38	72	122	26	23	17	4	5	18	5	13
Apoyo empresa-institución	3	11	11	69	148	79	58	107	42	54	53	18	35
Otros	31	41	49	41	45	34	19	34	11	27	66	15	45
Total	734	952	1,107	1,825	1,180	968	631	1,364	355	518	1,042	248	969

Cuadro N° 17
Manifestación Dominante por Período presidencial

	Período presidencial										Total		
	Ovando-Tórrez (1 y 2)	Báñez (1 y 2)	Pereda-G. Mesa	Siles	V. Paz	J. Paz	G. Sánchez 1	Báñez (3)	Quiroga	G. Sánchez 2		C. Mesa	Rodríguez
Sin información	1	1		1				1			2		5
Paro cívico	12	16	42	41	49	47	53	62	13	16	21	3	38
Huega tiempo definido	123	349	307	412	259	241	129	169	23	40	59	19	52
Huega indefinida	149	218	353	516	230	128	46	64	14	15	34	6	40
Huega hambre	67	60	169	202	147	199	148	245	70	93	125	28	99
Bloqueo urbano	19	19	25	71	23	11	11	97	27	44	101	17	92
Bloqueo rural	16	15	22	68	20	14	16	84	45	44	157	52	136
Marchas - manifestaciones	118	119	114	243	343	260	202	503	119	155	305	77	335
Tomas - motines	178	37	34	135	32	31	13	90	37	96	221	39	165
Brazos caídos	8	19	23	46	32	11	2	17	6	6	7	4	6
Estado de emergencia	19	62	13	1	21	6	2	28	6	8	4	4	170
Otros	25	17	5	29	24	20	9	4	1	1	6	3	6
Total	734	952	1,107	1,825	1,180	968	631	1,364	355	518	1,042	248	969

Cuadro N° 18
Formas de adhesión activas y pasivas por Periodo presidencial

	Periodo presidencial											Total	
	Ovando-Tórrez (1 y 2)	Bánzer (1 y 2)	Pereda-G. Mesa	Siles	V. Paz	J. Paz	G. Sánchez 1	Bánzer (3)	Quiroga	G. Sánchez 2	C. Mesa	Rodríguez	Morales
Pasivas	311	664	738	1.076	591	433	232	340	56	85	125	32	136
Activas	398	270	364	719	565	515	390	1.019	298	432	909	213	827
Otro	25	18	5	30	24	20	9	5	1	1	8	3	6
Total	734	952	1.107	1.825	1.180	968	631	1.364	355	518	1.042	248	969
									355				969
													11.893

Cuadro N° 19
Adversario por Periodo presidencial

	Periodo presidencial											Total	
	Ovando-Tórrez (1 y 2)	Bánzer (1 y 2)	Pereda-G. Mesa	Siles	V. Paz	J. Paz	G. Sánchez 1	Bánzer (3)	Quiroga	G. Sánchez 2	C. Mesa	Rodríguez	Morales
Sin información	12	24	9	19	15	15	6	11	4	9	3	5	5
Estado central	412	553	663	1.089	875	612	506	748	169	248	613	95	458
Policía y FF.AA.	12	22	15	11	1	3	2	12	20	7	11	4	10
Estado local	96	163	136	272	75	117	55	135	28	45	113	40	84
Empresas del Estado	53	54	74	173	149	164	40	162	42	71	72	14	86
Empresa privada	59	52	72	140	40	28	11	73	20	18	21	3	28
Comerciantes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	8
Transportistas	7	4	12	19	2	2	1	2	1	1	8	4	4
Otro	82	79	125	122	23	29	9	62	10	27	49	13	56
Alcaldía								158	61	92	150	70	238
Total	734	952	1.107	1.825	1.180	968	631	1.364	355	518	1.042	248	969
									355				969
													11.893

